



ESTADO DE BIENESTAR, SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL



DR. MARTÍ BATRES
GUADARRAMA. COMPILADOR





COMPILADOR

Dr. Martí Batres Guadarrama

Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Maestro en Trabajo Social por la misma universidad y abogado de formación inicial.

Cuenta con diplomados en Gerencia Política y en Políticas Sociales Urbanas.

Asimismo, en su fructífera carrera política, ha ocupado un sinnúmero de cargos de relevancia nacional, tales como: Presidente de la Cámara de Senadores, Senador, Diputado del Congreso de la Unión, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Secretario de Gobierno y Secretario de Desarrollo Social de esa entidad.

Actualmente, es el Director General del ISSSTE.

Su experiencia académica y política respaldan su compromiso con la salud y el bienestar social.



ESTADO DE BIENESTAR, SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

Compilador

Dr. Martí Batres Guadarrama



Comité editorial del ISSSTE

Presidente

Dr. Martí Batres Guadarrama

Coordinadora

Dra. Juana Elvira Suárez Conejero

Secretaría Técnica

Mtra. Brenda Munguía Anaya

MIEMBROS DEL ISSSTE

Mtro. Juan Gerardo López Hernández
Lic. Rocío del Pilar Villarauz Martínez
Lic. Omar Butrón Fosado
Lic. José Rodrigo Ávila Carrasco
Mtro. Felipe de Jesús Zermeño Núñez
Dr. Gustavo Reyes Terán
Mtro. Mario Joaquín Zepeda y Martínez
Mtra. Jabnely Maldonado Meza
Mtra. Dunia Ludlow Deloya
Mtro. Ricardo Ruiz Suárez
Lic. Jorge Aguilera Cercado
Mtro. Víctor Manuel Torres Olivares
Lic. Julio Pérez Guzmán
Carlos Humberto Cordero Peral

MIEMBROS EXTERNOS

Dra. Violeta Vázquez Rojas Maldonado
Subsecretaria de la Secihti
Dr. José Moya Medina
Representante de la OPS/OMS en México
Mtro. José Pedro Kumamoto Aguilar
Secretario General de la CISS
Mtra. Karina Luján Luján
Directora General de INDAUTOR
Antrop. Pedro Ovando Vázquez
Subdirector del Sistema de Publicaciones Científicas y Humanísticas de la Secihti
Dr. Pedro Agustín Salmerón Sanginés
Historiador
Dr. Ernesto Humberto Lammoglia Ruiz
Especialista en Psiquiatría

COORDINACIÓN EDITORIAL

Compilador

Dr. Martí Batres Guadarrama

Corrección de Estilo

Dra. J. Marcela Mora Camarena

Cuidado de la edición

Dra. Juana E. Suárez Conejero

Jefe de Imprenta

Carlos Humberto Cordero Peral

Revisión editorial

Mtra. Brenda Munguía Anaya

Encargado de Taller

Lic. Cristian Gerardo Cruz Olloqui

Diseño y diagramación

Lic. Martín Eduardo Andrade Andrade

Luis Alberto Millán Flores

Primera edición, julio 2025



Impreso en Ciudad de México, 2025

*Este material tiene como antecedente las ponencias magistrales del
"I Congreso PRAXIS en el ISSSTE. Estado de Bienestar, Salud y
Seguridad Social en la Cuarta Transformación", 2025.*



*Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons CC BY NC ND 4.0. Se autoriza su
reproducción y distribución sin fines de lucro, citando la fuente.*

Licencia completa: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

*Estado de Bienestar, Salud y Seguridad Social se terminó de imprimir y encuadernar en
julio de 2025 en los talleres de impresión de Editorial ISSSTE, ubicados en
Av. San Fernando 547-Edificio C, Tlalpan Centro I, Colonia Toriello Guerra,
Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, CDMX.*

ISBN 978-607-7739-09-8.

ÍNDICE

...

Prólogo

PASTOR CASTELL-FLORIT SERRATE

Articulación de los saberes científicos y la acción política para el bienestar social

CARLOS EDUARDO MONTAÑO

Reconstrucción y desarticulación de los derechos sociales. Hacia un sistema de salud universal e inclusivo en Argentina: Historia desafíos y perspectivas

GRACIELA ZULEMA ROSSO

La reconstrucción posneoliberal y el estado de bienestar social en Brasil

EMIR SIMÃO SADER

Destrucción neoliberal y reconstrucción de los derechos sociales en México. Perspectivas transformadoras desde el ISSSTE

MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El rol de las y los intelectuales en un estado de bienestar

JUANA ELVIRA SUÁREZ CONEJERO

Socialconformismo en red: el control de la conciencia

MARCOS ROITMAN ROSENMAN

PRÓLOGO

DR. PASTOR CASTELL-FLORIT SERRATE

DR. PASTOR CASTELL-FLORIT SERRATE¹

¹ Médico máster en Salud Pública y Gerencia en Salud graduado en México. Doctor en Ciencias de la Salud y doctor en Ciencia, cuenta con más de cincuenta años de experiencia en dirección en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud de Cuba, y dieciocho años como director provincial y rango de viceministro. Posee más de veinticinco libros y monografías como autor principal; también es coautor de decenas de artículos en temas de Salud Pública y Gerencia en diversas revistas nacionales y extranjeras de alto impacto. Es experto nacional e internacional en la Tecnología Gerencial de Intersectorialidad. Entre sus logros destacados también cuentan los siguientes: director de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud de Cuba, profesor e investigador emérito, así como titular académico emérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Obtuvo, además, el Premio en Administración de Salud que otorga la OPS/OMS el año 2016. Ha sido copresidente del Consejo Académico de MEDICC, organización de Cuba y EEUU de apoyo a la docencia y la investigación en el campo de la Salud Pública. También ha sido vicepresidente de la RED TIPSESA (Trabajo Intersectorial por la Equidad en Salud en las Américas). Recientemente, integra el Consejo Científico del ISSSTE.



Constituye para mí un privilegio y un gran honor el que se me haya invitado a realizar el prólogo de esta publicación, que expone los temas tratados en el “Primer Congreso Estado de Bienestar, Salud y Seguridad”, auspiciado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mismo que constituye una acción concreta en el contexto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación que impulsa, con gran acierto, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la base de los principios de dicha plataforma de acción que instaurara su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, durante su mandato presidencial. Por cierto, amigos entrañables de Cuba y de nuestro aguerrido pueblo.

El presente texto se orienta hacia la imperiosa necesidad, en estos complejos tiempos que vivimos, de lograr una articulación efectiva entre el saber científico y la acción política, sobre la base de un eje central que contribuya a la construcción de un «estado de bienestar social» para las políticas sociales, la salud y la seguridad social.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que su contenido es un faro de esperanza, una invitación a construir una sociedad más justa, donde la inteligencia profesional no sea un privilegio de unos pocos, sino un instrumento al servicio del bien común. Bajo estos principios, y en los temas que incluye esta publicación, se rechaza contundentemente la frialdad de un sistema neoliberal que prioriza el lucro sobre la dignidad humana, por lo que, en el mismo, se propone que prevalezca la colaboración ante la competencia despiadada; defender la solidaridad ante la privatización de lo público; que se posibilite el derecho pleno a una vida digna de los que habitamos este mundo y bajo el reclamo fundamentado de que “el conocimiento científico debe ser un pilar indisoluble de la justicia social”.

Es, sin duda, la defensa irrenunciable de la ciencia al servicio de la humanidad, no de intereses privados en un sistema que fragmenta el acceso a la salud, que subordina la investigación a la rentabilidad y que, por ende, niega el derecho a la democratización del saber y de que prevalezca la justicia para todos por igual. Este no es solo un libro de ideas, sino un llamado a transformar la indignación, que en muchos impera en acción. Un mundo que posibilite una salud accesible, una educación liberadora, porque con total certeza ¡un mundo mejor es posible! Uno que garantice el bienestar universal, público y solidario.

Aquí se desentraña la paradoja de nuestra época; o sea, mientras los avances médicos y tecnológicos alcanzan niveles

sin precedentes, las desigualdades se profundizan. Finalmente, les invito a recorrer estas más de cien páginas con espíritu crítico y corazón abierto, pues la justicia social no es una utopía, sino un horizonte posible, si tenemos el valor de luchar por conquistarla.

De igual forma, reitero con estas reflexiones el criterio de que esta publicación constituye una herramienta de primer orden para los directivos y profesionales de la salud, así como para los lectores en general; y es también un texto de consulta permanente para el desarrollo exitoso de una salud pública, donde ella y la seguridad social prevalezcan sobre la mercantilización y las lógicas de la rentabilidad que han caracterizado las reformas neoliberales hasta nuestros días.

ARTICULACIÓN DE LOS SABERES CIENTÍFICOS Y LA ACCIÓN POLÍTICA PARA EL BIENESTAR SOCIAL

CARLOS EDUARDO MONTAÑO

CARLOS EDUARDO MONTAÑO¹

¹ Doctor en Servicio Social y profesor titular (catedrático) e investigador de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ, Brasil, 2001). Graduado en Servicio Social por la Universidad de la República (UdelaR, Uruguay, 1989). Con post-doctorado por el Instituto Superior Miguel Torga, Coimbra-Portugal, entre 2009 y 2010. Autor, entre otros, de los libros *Microempresa na era da globalização* (Montaño, 1997); *La naturaleza del Servicio Social* (Montaño, 1998 y 2007); *Tercer Sector y Cuestión Social* (Montaño, 2002 y 2005); *Estado, Classe e Movimento Social* (Duriguetto y Montaño, 2010); *Alienación Parental y Custodia Compartida* (Montaño, 2021); *Identidade e Classe Social* (Montaño, 2021) y *Trabajo Social Crítico* (Guerra y Montaño, 2024). Profesor visitante y conferencista en diversos países de Hispanoamérica, Portugal y en España. Fue miembro de la Dirección Ejecutiva de ALAEITS (Asociación Latino Americana de Enseñanza e Investigación en Trabajo Social, 2006-2008) y coordinador nacional de Relaciones Internacionales de la ABEPSS (Asociación Brasileña de Enseñanza y Pesquisa en Servicio Social, 2008-2010 y 2011-2012). Coordina el “Núcleo de Estudios Marxistas sobre «Política, Estado, Trabajo y Servicio Social»” (PETSS) y el “Núcleo de Estudios sobre Alienación Parental y Trabajo Social” (NEAPSS).



El presente texto se dirige a problematizar la articulación entre saber científico y acción política, así como las condiciones de desarrollo de un Estado orientado para el bienestar social; se genera en el contexto del Segundo Piso de la Cuarta Transformación en México, donde la construcción de un «estado de bienestar social» para las políticas sociales, la salud y la seguridad social se establece como un eje central.

1. Ciencia y política

Pensar en la ciencia, la política y sus articulaciones exige saturar la reflexión de mediaciones.

1.1. Saber teórico y acción política

Es habitual interpretar y ampliar el significado del término «conocimiento» a toda forma de saber. Sin embargo, resulta necesario comprender la existencia de diferentes formas de conocimiento: los saberes instrumentales, operacionales, situacionales, religiosos, artísticos, intuitivos, del sentido común, popular, entre otros. Algunos de éstos significan

los modos diversos de apropiación de la realidad por el pensamiento, a partir de la experimentación y la vivencia; otros, por el contrario, expresan “construcciones” ideales del pensamiento sin nexo alguno con la realidad objetiva.

El conocimiento teórico—científico es apenas una forma específica de conocimiento y, por lo tanto, no puede identificarse mecánicamente el conocimiento —en general— con el conocimiento teórico o científico —en particular—. Éste sigue pautas metodológicas para su formulación y es sometido al escrutinio y análisis de la comunidad científica.

Pese a tal diferenciación entre el conocimiento científico y las demás formas de conocimiento, es preciso también afirmar que no podemos homogeneizar este campo de saber. Efectivamente, la gnoseología y la epistemología nos permiten comprender diferentes formas, métodos, procedimientos y concepciones del “hacer ciencia”, de la generación de conocimiento teórico-científico.

No abordaremos aquí la distinción entre ciencias exactas, naturales y sociales, ateniéndonos apenas a estas últimas. En ellas, las corrientes hegemónicas derivan del positivismo y neopositivismo. El positivismo opera dos tipos de segmentación y disociación.

Con tal conocimiento fragmentario, segmentado, se está imposibilitado de una comprensión de la totalidad social, y la transformación social se reduce a una mera utopía romántica, idealista.

La segunda segmentación positivista se opera en la disociación entre saber y hacer, entre teoría y práctica. Es decir, para alcanzar el supuesto “conocimiento neutro” —objetivo— que tanto pretende Durkheim (1983), o la “neutralidad axiológica” de Weber (2012), el saber debe ser desgarrado de los meandros e intereses propios de la práctica, sea ella cotidiana, profesional o política.

Como afirma Lukács (2010), la filosofía neokantiana, notoriamente el positivismo y weberianismo, se fundan en la:

ausencia de relaciones entre pensamiento y acción, entre teoría y praxis. Por un lado, la teoría [en esa perspectiva] enseña un completo relativismo: la igualdad formal de todos los fenómenos sociales, la íntima equivalencia de todas las formas históricas [...] De acuerdo con esto [...], [por otro lado], la acción ética [y política] deviene, al contrario, a partir de una mística decisión del “libre arbitrio”, nada teniendo que ver con el proceso cognitivo (p. 65).

Así, continúa este autor, la incompreensión del individuo sobre la realidad tiene sobre él un “necesario efecto ideológico de que su vida privada se desenvuelve —aparentemente— fuera de esta sociedad mistificada” (Lukács, 2010, p. 66; 1981, p. 34). Ahora bien, no existe en realidad conocimiento neutro; todo conocimiento es saturado de intereses (Habermas, 1982), de valores, de visiones de mundo, de necesidades. La mera noción de neutralidad en el conocimiento es una forma de camuflar, esconder la intencionalidad de ese saber.

Precisamos desentrañar de las entrelíneas de los discursos, de los fundamentos de los saberes, de la biografía de los autores, sus presupuestos filosóficos, sus valores y concepciones éticas, sus intereses y su historia política. Todo conocimiento, especialmente en el campo social, tiene como

base estos elementos subjetivos. La realidad es objetiva, pero la apropiación de ésta por el pensamiento, el conocimiento — incluso el científico—, está saturado de subjetividad.

En este sentido, una primera distinción necesaria se da entre un saber orientado para la manutención y perpetuación de la realidad y un conocimiento que se sustenta en la perspectiva de su transformación. Los enfoques positivistas y neopositivistas: funcionalismo, estructuralismo, pragmatismo, sistemismo, etcétera. Es decir, el pensamiento burgués hegemónico, así como el irracionalismo posmoderno, tienen como fundamento la “perpetuación de la realidad”, sea porque la comprenden como un sistema estable que debe reajustar, adaptar o corregir sus disfunciones y anomias, sus partes desajustadas, para la garantía de su manutención (positivismo y weberianismo), sea porque ni siquiera conciben una realidad macro — posmodernismo—. Dicho de otro modo, el saber dissociado de la práctica funda un «conocimiento netamente conservador». Con esto podemos afirmar que ni siquiera el conocimiento teórico-científico es garantía de un saber crítico y comprometido con la acción político-transformadora.

Veamos, entonces, los fundamentos de un conocimiento científico orientado a la crítica y la transformación social.

1.2. El conocimiento científico orientado para la crítica -radical- y transformación social

Como Marx (1975) sostiene en sus célebres *Tesis sobre Feuerbach*, “los filósofos no han hecho más que *interpretar* de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de *transformarlo*” (p. 428). Para este autor es la perspectiva de transformación

social o de revolución la que debe fundamentar el saber crítico. Conocer para transformar la realidad. La mera interpretación sin la acción transformadora es lo que ocurre con la ciencia burguesa, antes y después de la constitución del orden burgués, de la sociedad capitalista.

Efectivamente, según señala Marx (1985), “la economía política burguesa [clásica, anterior a 1830] solo puede asumir carácter científico mientras la lucha de clases permanezca latente”, surgiendo y desenvolviéndose en un “periodo en que la lucha de clases no estaba desarrollada” (p. 13). Sin embargo, en el año de 1830, sobrevino la crisis decisiva entre capital y trabajo, cuando:

la burguesía en Francia e Inglaterra había conquistado poder político. A partir de ahí, la lucha de clases adquirió, práctica y teóricamente, formas más definidas y amenazadoras. Sonó el doblar de campanas de la ciencia económica burguesa. No interesaba más [a ella] saber si este o aquel teorema era verdadero o no; sino que importaba saber qué era útil o perjudicial para el capital [...] La investigación científica imparcial cedió su lugar a la conciencia deformada y a las intenciones perversas de la apologética (Marx, 1985, p. 14).

De esta forma, en el tránsito de un tiempo donde la clase burguesa no estaba consolidada como hegemónica —anterior a 1830—, para la era del dominio de la burguesía —posterior a 1848— es donde la ciencia burguesa pierde su carácter crítico y “revolucionario” y se torna en un pensamiento meramente apologético. La “economía política” se vuelve una “economía vulgar”: “Es la declaración de falencia de la economía «burguesa»” (Marx, 1985, p. 15).

Se configura aquí lo que Lukács (2010) va a llamar “*decadencia ideológica*” de la burguesía, que “tiene su inicio cuando la burguesía domina el poder político, y la lucha de clases entre ella y el proletariado se coloca en el centro del escenario histórico” (p. 51). Es aquí donde nace el conocimiento fragmentario, fenoménico, recortando partes de la realidad, sin llegar a alcanzar un conocimiento crítico de la totalidad social y, con esto, extirpando cualquier posibilidad de transformación social.

El conocimiento, aquí, tiene la función de preservar y legitimar la realidad. Como sostienen Marx y Engels (2013) en *La ideología alemana*:

Las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes, esto es, la clase que es la fuerza *material* dominante de la sociedad es, al mismo tiempo, su fuerza *espiritual* dominante. La clase que tiene a su disposición los medios de la producción *material* dispone también de los medios de la producción *espiritual*, de tal modo que a ella están sometidos aproximadamente al mismo tiempo los pensamientos de aquellos a los cuales faltan los medios de la producción espiritual (p. 47).

Así, la ciencia burguesa, que se orienta para la perpetuación y legitimación del orden burgués, produce un conocimiento fragmentario, fenoménico, abstracto, procurando la naturalización y el ocultamiento de la realidad. La pobreza, por ejemplo, es naturalizada, entre tanto la explotación es ocultada. Para Marx, al contrario, el conocimiento debe orientarse a la transformación social, a la plena emancipación humana. Debe ser, por lo tanto, un conocimiento crítico; pero una crítica radical, en el sentido de que busque alcanzar la raíz de los fenómenos, superando su visión meramente aparente, manifiesta, y llegando a su esencia y sus fundamentos,

comprendiendo las causas y no nada más las consecuencias. Supera, entonces, el conocimiento pseudoconcreto (Kosik, 1976) para reconstruir en el pensamiento la totalidad concreta.

El conocimiento crítico —radical— busca no solo describir un fenómeno, sino alcanzar el entendimiento de sus causas, su esencia. No trata el fenómeno de forma aislada, autónoma, como autodeterminado; por el contrario, intenta comprenderlo dialécticamente a partir de sus múltiples delimitaciones, inserto en una realidad que lo contiene y determina. El fenómeno es comprendido en la totalidad social. Esta crítica radical, que alcanza la «raíz» de los fenómenos, es una herramienta en el proceso de conocimiento, es un arma potencial. Como es expresado por Marx (2005), en su *Crítica de la filosofía del derecho de Hegel*, es necesario reconocer que:

el arma de la crítica no puede sustituir la crítica de las armas, [...] el poder material tiene que derrocar por medio del poder material, pero también la teoría se convierte en poder material tan pronto se apodera de las masas (pp. 151-152).

En otras palabras, el conocimiento teórico-crítico no tiene fuerza para transformar la realidad por sí solo. No constituye directamente un arma, una herramienta de transformación de la realidad. Sin embargo, cuando ese conocimiento crítico-radical alcanza a las masas, cuando es apoderado por las masas de personas trabajadoras, ahí sí el conocimiento puede constituir una herramienta, un arma potencialmente transformadora.

De esa forma, la teoría crítica —radical—, el conocimiento crítico, por alcanzar la raíz de las cosas, su esencia, posee fuerza material como un arma, como herramienta, cuando es apropiado por las masas para el cambio social. El conocimiento a

partir del método materialista, histórico y dialéctico, inaugurado por Marx y fundado en la perspectiva de la revolución, es, por lo tanto, un «conocimiento crítico-radical», constituyendo un arma potencial para las transformaciones operadas por las clases trabajadoras y sectores denominados subalternos, cuando es apropiado por estas masas de la población trabajadora, explotada, oprimida.

Está aquí la respuesta de por qué el método y la teoría marxistas enfrentan tanto rechazo por parte del pensamiento burgués: se trata de una poderosa arma para la transformación social operada por las masas de trabajadoras y trabajadores, en el camino de la emancipación humana. Impedir que ese conocimiento sea apoderado por éstas constituye, por lo tanto, un aspecto central de la lucha ideológica de la burguesía. Contrariamente, contribuir para su apropiación popular, representa un camino estratégico de la lucha de la clase trabajadora.

Si el conocimiento crítico —radical— se funda en la perspectiva de revolución y se orienta para la transformación social, éste no configura directa y necesariamente una práctica transformadora. Una teoría revolucionaria, a pesar de ser necesaria, no determina mecánicamente una práctica revolucionaria; hay, en esa relación, innumerables mediaciones que no pueden ser suprimidas: agotamiento del modelo vigente, correlación de fuerzas sociales, grado de conciencia —de clase— de los sujetos, capacidad de organización y movilización, entre otras.

La crítica radical no es solo un estado de espíritu, un sentimiento —crítico—, un espíritu de rebeldía, una pasión. La crítica se funda en la razón, en el pensamiento racional, en la capacidad

teórico-reflexiva del conocimiento científico crítico, sin lo cual el saber será meramente romántico, ingenuo, moralista. No se trata de un conocimiento intuitivo, vivencial, místico o moralista, sino de uno «racional y científico».

Aun con ello, no basta la razón; el conocimiento meramente reflexivo lleva a un saber “neutro”, contemplativo, descomprometido. El conocimiento crítico debe alimentarse de la indignación, de la pasión, lo que lleva al compromiso del sujeto, a la necesidad de transformar la realidad, a conocer para transformar. De esta forma, como afirma Marx (2005):

[...] la crítica no es una pasión del cerebro, sino el cerebro de la pasión. No es un bisturí anatómico, sino un arma. [...] La crítica no es más un fin en sí misma, sino apenas un medio; la indignación es su modo esencial de sentimiento, y la denuncia, su principal tarea (p. 147).

De este modo, el punto de partida de la crítica —su objeto— es la realidad; su motor es la indignación —con las formas de desigualdad, dominación, explotación, opresión— y la teoría crítica radical es la herramienta —que permite pasar de la indignación al conocimiento verdadero de los fundamentos y de la esencia de los fenómenos—. Razón y pasión, cerebro y corazón, pensamiento y sentimiento, ciencia y política, es la combinación necesaria para el conocimiento y el compromiso críticos con la transformación.

2. Bienestar social y «Estado de bienestar social»

Con esta comprensión de crítica radical —no como rechazo, sino de ir a las raíces, al fundamento, a la esencia— y de su articulación con la política transformadora, abordaremos ahora el «bienestar social» y el llamado «Estado de bienestar social».

2.1. El concepto de bienestar social

Como vimos, la crítica radical —que alcanza la raíz de los fenómenos dentro de la totalidad social— no es rechazo ni negación, sino la apropiación y superación dialéctica. De esta forma, someteremos la noción de bienestar social al análisis crítico.

El concepto de “bienestar” es un concepto abstracto y nítidamente burgués. En sí, este aspecto no sería problemático, ya que vivimos en una sociedad burguesa. Sin embargo, como vimos, el conocimiento apologético, pretendiendo la perpetuación y legitimación del orden, procura la “naturalización” y ocultamiento de la realidad. Así, al hablar de bienestar, al orientarse hacia el bienestar, se acaba escondiendo y camuflando la desigualdad social, la contracción de clase, la explotación. La noción y la orientación política hacia el bienestar social tienden al abandono de la lucha contra la extrema desigualdad social, del control y hasta la eliminación de la explotación; apunta a descartar la transformación social y la superación del orden capitalista.

Esto no quiere decir que se trata de conceptos necesariamente antagónicos o alternativos, que tengamos que optar entre la búsqueda del bienestar social —ahora— o la lucha contra la explotación y la desigualdad social —a largo plazo—. Ambos pueden, ciertamente, constituir procesos concomitantes. Se trata de no comprender el bienestar social ilusoriamente como una panacea, como una solución definitiva o como una finalidad. El bienestar social, como finalidad última, constituye un proyecto burgués, notoriamente conservador. Al contrario, el bienestar social como momento, como un objetivo parcial y transitorio, puede

constituir una etapa en el camino para la plena emancipación humana y la eliminación de la explotación y las formas de opresión.

Resulta imprescindible, por lo tanto, someter el concepto —y el proyecto— de bienestar social a la crítica radical, no para su rechazo o negación, sino para la comprensión de sus fundamentos, posibilidades y límites; también, concebirlo y procurarlo sin abandonar las luchas contra la explotación, la opresión y la desigualdad social. Asimismo, se trata de un concepto que no se reduzca a un mero estatus mínimo de sustento, más bien, orientado a una plena realización de los sujetos; un concepto y un proyecto de bienestar que supere la “homogenización” de la población, pero que no esconda las contradicciones y formas de desigualdad, opresión y explotación: el bienestar social como una forma de “emancipación política” en el camino para la “emancipación humana”.

2.2. Fundamentos del estado de bienestar social

El llamado «estado de bienestar social» constituye un modelo históricamente determinado y datado. Se trata de una experiencia producida por una serie de aspectos estructurales y coyunturales. La reconstitución de una experiencia semejante requiere, nuevamente, del análisis crítico de la misma. Veamos los fundamentos del estado de bienestar social y sus condiciones de reformulación.

En primer lugar, el estado de bienestar social no es históricamente el mero resultado de los intereses de las clases trabajadoras y sectores subalternos, tampoco es producto de las buenas intenciones del Estado, o de un gobierno progresista; resulta y representa un determinado pacto social, un consenso, a partir de

las determinadas correlaciones de fuerzas, que refleja intereses de las clases y sectores sociales centrales, principalmente el capital y el trabajo. Todo indica, en los tiempos actuales, que la tensión entre las clases fundamentales no sustenta este pacto social. Así, en el contexto actual de la crisis capitalista, la burguesía nacional pasa a “abdicar de una vez por todas de intentar la hegemonía plena de la sociedad, satisfaciéndose [ahora] con la condición de socio-menor del capitalismo occidental” (Fiori, 1994).

En este mismo sentido, Ianni (1989) afirma que: “la burguesía nacional rompe los compromisos tácticos con el proletariado y algunos otros sectores del populismo, en beneficio de sus razones estratégicas, dadas por el orden capitalista” (p. 100). Es preciso, para reconstruir una experiencia semejante al estado de bienestar social, la promoción y formación de un nuevo “pacto social”, particularmente entre las clases sociales centrales, capital y trabajo. Un gobierno progresista aún se encuentra en una sociedad de hegemonía burguesa y correlación de fuerzas favorable al capital; pero, como sostiene Gramsci, una clase que aún no conquistó la hegemonía económica y política, puede, sin embargo, ser ideológicamente hegemónica (Coutinho, 1994, p. 59). Ello muestra la necesidad de una lucha ideológica para fomentar y legitimar este proceso.

En segundo lugar, esta formación estatal se desarrolla y consolida históricamente en un contexto de expansión productivo-comercial. Es el llamado “círculo virtuoso fordista/keynesiano” el que permite y necesita del estado de bienestar social. Un Estado que concomitantemente estimule y promueva la producción industrial y el consumo en masa. En el fondo, el bienestar social en la sociedad capitalista significa básicamente la inserción de la clase trabajadora en la producción y en el

consumo; sin embargo, en el actual contexto de crisis, tal actividad productivo-comercial pasa a subordinarse al proceso de acumulación por vía de la especulación financiera.

Si al capital productivo y comercial le interesa la participación popular en la producción de plusvalía —actividad productiva— y en la realización de esa plusvalía mediante el consumo —esfera comercial—, para lo cual los incentivos estatales, las políticas sociales, la inversión estatal en infraestructura, la salud y la educación pública son acciones estatales necesarias; contrariamente, para el capital financiero, estas últimas representan gastos eliminables. La lógica, dinámica e intereses del capital financiero constituyen un fuertísimo *lobby* contra el gasto social estatal. Enfrentar y reducir el poder de presión de este sector económico del capital financiero, estimulando la actividad productiva y comercial, es tarea fundamental para efectivizar una experiencia semejante a un estado de bienestar social.

En tercer lugar, la experiencia del estado de bienestar social típica de países como Canadá y los de Europa central y nórdica se diferencia de las propuestas keynesianas, como las de los Estados Unidos e Inglaterra, en la medida en que éstos procuran el “bienestar” mediante políticas económicas de estímulo al “pleno empleo”; y aquéllos sustentan el bienestar social en amplios sistemas de previsión y seguridad social. Es así que, con el fin de promover estas políticas, el Estado precisa recaudar fondos públicos mediante la cobranza de más impuestos destinados a más acciones estatales. La cuestión es que, como vimos, para el capital productivo-comercial —más allá del grado de consciencia individual sobre esto— los impuestos constituyen “inversiones” que ciertamente traen retornos económicos; entre tanto, para

el capital especulativo financiero internacional, los tributos son vistos como “gastos” sin retorno.

Nuevamente, las presiones para la austeridad estatal y la reducción de impuestos y gastos sociales estatales constituyen un importante escollo para esta experiencia. Una reforma tributaria progresiva, que disminuya los impuestos a los sectores sociales más desfavorecidos, ampliando la carga tributaria a los sectores más abastecidos, se torna objetivo central para permitir financiar gastos sociales del Estado.

Un cuarto aspecto para considerar es la necesaria articulación entre estado de bienestar social con un proceso de industrialización. En la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, esta relación se conoció como “Proyecto fordista/keynesiano”. Efectivamente, dentro de la lógica capitalista, ya sea para la recaudación de impuestos, o ya para el desarrollo de infraestructura o la promoción de servicios y políticas públicas, la articulación entre un “Estado social” y la industrialización se tornó imprescindible.

Contrariamente a un país desindustrializado y de producción fundamentalmente rural, agropecuaria y mineral, la producción industrial no solo comparativamente emplea más trabajadores que la reducida necesidad de mano de obra en la actividad rural, también presenta mucho mayor valor agregado a su producto; en contraste con el bajísimo valor agregado de la producción agropecuaria y mineral. Este más elevado empleo de fuerza de trabajo y de valor agregado, a partir de la producción industrial, redundará en mayores ingresos para el Estado, potencializando las políticas públicas y su acción social, así como en mayor “bienestar” de la población.

Por tal motivo, promover un proceso inspirado en el estado de bienestar social exige la promoción de la industrialización nacional. Parece que el contexto actual, dada la articulación de los BRICS y de los países del llamado “sur global”, en respuesta a las medidas tarifarias del Gobierno de Trump, pueden facilitar este proceso de industrialización en nuestros países.

En quinto lugar, considerando ambos como modelos de desarrollo, regímenes de acumulación, según Harvey (1993), orientados a la acumulación capitalista, es preciso distinguir las necesidades y condiciones de los contextos de desarrollo productivo-comercial y financiero, caracterizados como “ciclos sistémicos de acumulación”, según Arrighi (1996). Así, en el auge de la acumulación, mediante la actividad productivo-comercial (desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años setenta), los llamados “30 años gloriosos del capital”, la articulación industrialización-bienestar social, mediada por la intervención estatal, constituía el modelo hegemónico de desarrollo: promoción de la inversión y desestímulo a la actividad financiera, elevados impuestos, estímulos a la producción industrial en masa, incentivo y promoción del consumo masivo, políticas proteccionistas para la industria local, así como desarrollo de políticas y servicios sociales.

Sin embargo, con la crisis capitalista —a partir de 1973—, la acumulación por vía de la especulación financiera exigió cambios significativos al modelo de acumulación, lo que, inspirado en los postulados de Hayek (1990), se dio por llamar “modelo neoliberal”. Este modelo requirió de profundos cambios en la economía, la política y el estado de bienestar social: austeridad estatal en los gastos sociales

(precarizando las políticas sociales), reducción tributaria, aumento de intereses, exigencia de superávit primario para remunerar el capital financiero, fin del proteccionismo y apertura de fronteras para los productos extranjeros. Es decir, el modelo neoliberal es todo lo contrario al modelo fordista/keynesiano o del estado de bienestar social. Fragilizar el neoliberalismo, enfrentando sus pilares, es condición *sine qua non* para promover una experiencia semejante a un estado de bienestar social.

Por último, las experiencias de estados de bienestar social o de estados keynesianos se han desarrollado estrictamente en países centrales del capitalismo mundial, Europa, Estados Unidos y Canadá. En nuestros países latinoamericanos, los Estados llegaron muy incipiente y precariamente a una limitada intervención social. Construir una experiencia como ésta, más allá de los aspectos supra citados, en un país periférico, constituye un enorme desafío.

Según las variadas y diversas teorías de la dependencia, los países centrales y periféricos se constituyen así por su condición de dependencia en el sistema capitalista mundial, por una forma de “neocolonialismo” (Lenin, 1975), mediante el cual la extracción y expoliación de la riqueza, de los países dependientes para el centro, se da a partir del pago por tecnología, de las transacciones intrafirmas (plusvalía producida en las sucursales que pasa para la matriz extranjera) y de la amortización e interés de la deuda externa. Aún más, los países periféricos tienden a exportar *commodities* —de bajo valor agregado— e importar productos industrializados —de elevado valor agregado—. Conseguir frenar ese verdadero éxodo de la riqueza producida en los países periféricos, y alterar la relación

importación-exportación, se torna condición imprescindible para una experiencia semejante a un estado de bienestar social.

No obstante, el desarrollo del sur global y la articulación económico-comercial de los llamados BRICS, particularmente en el fin de la dependencia del dólar en el comercio internacional, constituye un proceso a ser observado, que puede potenciar una experiencia de constitución de estados de bienestar social.

**RECONSTRUCCIÓN Y
DESARTICULACIÓN DE LOS
DERECHOS SOCIALES.
HACIA UN SISTEMA DE SALUD
UNIVERSAL E INCLUSIVO
EN ARGENTINA: HISTORIA,
DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS**

GRACIELA ZULEMA ROSSO

GRACIELA ZULEMA ROSSO¹

¹ Médica sanitarista, reumatóloga y política con más de treinta años de trayectoria en Salud Pública y Gestión Gubernamental en Argentina. Ha desempeñado cargos ejecutivos y legislativos a nivel local, provincial y nacional, promoviendo políticas de salud y desarrollo social. Su compromiso con la justicia social, la igualdad de oportunidades y los derechos de las mujeres la ha llevado a ocupar puestos clave en organismos gubernamentales y en el ámbito de la Salud Pública.

A lo largo de su carrera, ocupó cargos estratégicos como intendenta de Luján y diputada nacional, ocupando la vicepresidencia de la Comisión de Salud. También se desempeñó como secretaria nacional de Políticas Sanitarias y secretaria nacional de Regulación de Programas Sanitarios, donde fue responsable de liderar políticas de promoción de la salud, los derechos sexuales y reproductivos y prevención de enfermedades. Como interventora del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), lideró una reestructuración para mejorar la eficiencia del sistema. Desde 2019, participa en el espacio de pensamiento político y progresista “Manifiesto Argentino” y en el de “Plataforma (2024)”, consolidando su liderazgo en la construcción de políticas públicas inclusivas.



Argentina cuenta con un sistema de salud mixto compuesto por el sector público, las obras sociales y la medicina privada. Tradicionalmente, el primero ha garantizado la atención gratuita para millones de ciudadanas y ciudadanos, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. No obstante, el desfinanciamiento progresivo y la falta de planificación a largo plazo han generado problemas estructurales que dificultan su funcionamiento eficiente. En este contexto, se ha considerado que la salud pública se encuentra en un momento de definiciones históricas cruciales.

El debate no es técnico ni administrativo, sino fundamentalmente político: nos enfrentamos a la disyuntiva entre un modelo de salud concebido como derecho inalienable de todas y todos los habitantes, o su sometimiento a las lógicas del mercado y la ganancia privada. De hecho, el pasado y el presente del llamado “Sistema” de Salud en Argentina han estado marcados por una tensión persistente entre quienes defendemos la salud como un derecho humano y quienes han intentado transformarla en mercancía. Desde una perspectiva nacional, popular y feminista, sostenemos que la salud debe ser un bien social

garantizado por el Estado, con financiamiento adecuado y con la plena participación de las trabajadoras, los trabajadores y la comunidad en su conjunto.

Contexto histórico y estructura del sistema de salud

A lo largo de la historia, los avances en salud, en Argentina, han estado estrechamente vinculados a proyectos políticos populares y a la organización de trabajadoras y trabajadores. La expansión del sistema sanitario durante el primer peronismo, liderado por Ramón Carrillo, demostró que una intervención decidida del Estado puede garantizar atención de calidad y acceso equitativo. Sin embargo, desde las dictaduras militares y con el avance del neoliberalismo, se implementaron políticas que debilitaron el sistema público en favor del sector privado.

A partir de 1956, la inauguración y el mantenimiento de hospitales dejaron de ser una prioridad estatal, convirtiéndose en prácticas esporádicas y excepcionales. En octubre de 1963, al asumir la presidencia, el doctor Arturo Illia enfatizó la importancia de defender la salud en todas las etapas de la vida. La lucha del ministro Oñativia contra los laboratorios multinacionales es considerada uno de los factores que desencadenaron un nuevo golpe militar. En 1973, el presidente Cámpora encargó al ministro Liotta, y posteriormente Juan Domingo Perón, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), cuya implementación comenzó en cuatro provincias y se expandió a otras con financiamiento provincial.

Este proceso fue abruptamente interrumpido por el golpe militar de 1976, el más sangriento de la historia Argentina.

Con la recuperación democrática en 1983, el presidente Raúl Alfonsín y su ministro de Salud, Aldo Neri, impulsaron la Ley Nacional de Salud (23.661), que establecía una gestión compartida entre el Estado y las obras sociales, bajo criterios de justicia distributiva. Aunque esta norma fue promulgada en 1989, nunca llegó a implementarse plenamente. La Ley 23.660, que regula las obras sociales, continúa vigente.

Posteriormente, durante la presidencia de Carlos Menem, y en el marco del Consenso de Washington, se descentralizaron los hospitales nacionales sin la transferencia correspondiente de recursos. Paralelamente, surgieron y se transformaron las prepagas (seguros privados en salud), algunas de ellas se volvieron gerenciadoras de obras sociales, consolidando la privatización del sector. Durante el gobierno de la Alianza, el decreto de desregulación de las obras sociales facilitó la transferencia de recursos de la seguridad social a las prepagas, favoreciendo la intermediación y aumentando las ganancias empresariales en salud.

Tuvieron que pasar trece años para que, con la asunción de Néstor Kirchner, se anunciara el objetivo de consolidar un Sistema Nacional de Salud basado en una red donde el hospital público fuera el eje central, integrando centros de salud públicos y privados con estrategias de atención primaria.

La década que siguió estuvo marcada por la expansión de derechos a través de diversas leyes, entre las que destacan: Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (2003), sancionada durante el gobierno de Eduardo Duhalde; Ley 25.871 de Política Migratoria (2003); Ley 25.929 de Parto Humanizado (2004); Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes (2005); Ley de Anticoncepción Quirúrgica (2006); Ley de Educación Sexual Integral (2006); Ley 26.586 de Derechos del Paciente (2009); Ley 26.586 sobre Prevención de Adicciones y Consumo de Drogas (2009); Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010); Ley 26.657 de Protección de la Salud Mental (2010); Ley 26.682 de Regulación de Prepagas (2011); Ley 26.862 de Fertilización Asistida (2013); y finalmente, la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial en 2014. Este cuerpo normativo no solo significó un avance legislativo, sino que consolidó un nuevo paradigma de salud y ciudadanía.

Entre 2003 y 2015, se construyeron Centros Integrales Comunitarios (CIC) en todo el país, financiados con recursos nacionales, siguiendo un criterio federal y un enfoque socio-sanitario basado en la atención primaria de la salud. Entre 2002 y 2015, se implementaron programas nacionales, como Remediar, que distribuían medicamentos esenciales, mientras que el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable garantizó métodos anticonceptivos y capacitación en efectores del primer nivel de atención, como clínicas, sanatorios o consultorios. Asimismo, el calendario nacional de vacunación fue ampliado sustancialmente, incorporando más de veinte vacunas nuevas, y se crearon iniciativas como el Programa de Salud Bucal y el Programa de Prevención del Embarazo Adolescente.

En ese lapso, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2011, se lanzó el proyecto de los Hospitales del Bicentenario, dirigidos a las zonas más postergadas del país, con el objetivo de expandir la capacidad hospitalaria bajo un esquema de red y complejidad creciente. Sin embargo, la llegada del gobierno neoliberal al poder, de 2015 a 2019, detuvo muchos de estos avances, bajo el argumento de que no eran necesarios.

Finalmente, entre 2019 y 2023, con la presidencia de Alberto Fernández, se retomaron varias de estas obras, avanzando en la terminación y apertura de hospitales estratégicos. En este mismo periodo, se aprobaron dos leyes fundamentales: la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Ley de los 1,000 días.

También se fortaleció la infraestructura de los centros de salud, aunque la gestión de la estrategia de Atención Primaria de la Salud (APS) continuó dependiendo de provincias y municipios, reproduciendo las desigualdades territoriales. En 2007, presenté en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley Nacional de Salud junto a personas legisladoras del bloque del Frente para la Victoria. Aunque fue tratado en comisiones y contó con apoyo multipartidario, perdió estado parlamentario. Más adelante, fue presentado, con modificaciones, por los ministros Manzur y Gollán, pero nunca llegó a ser debatido en el recinto durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.

Mientras tanto, el sector privado prestador de servicios se expandió aceleradamente, beneficiado por los recursos del PAMI, obras sociales sindicales y provinciales, regímenes especiales y, más recientemente, por el auge de la medicina privada. Esta expansión del capital privado se dio sin controles ni contrapesos, avanzando sobre funciones que deberían ser garantizadas por el Estado.

Recortes y deterioros de la política sanitaria

Desde la asunción del presidente Javier Milei, la salud pública ha venido sufriendo recortes presupuestarios que han impactado en la provisión de insumos, el mantenimiento de hospitales y los medicamentos esenciales. Se eliminaron programas sanitarios clave y se redujeron los recursos destinados a la salud mental y a la prevención de enfermedades. Este ajuste fiscal, justificado en la necesidad de reducir el déficit, ha generado un aumento en la desigualdad en el acceso a la salud.

El debilitamiento del sistema público ha llevado a una sobrecarga en los hospitales, largos tiempos de espera y una disminución en la calidad de la atención. Muchas personas, al no poder afrontar los costos de los servicios privados, quedan sin posibilidad de tratamientos oportunos, lo que incrementa la mortalidad evitable y la propagación de enfermedades prevenibles.

Las medidas adoptadas por la actual administración han priorizado una visión de mercado sobre el bienestar de la población, desestimando el rol del Estado en la provisión de salud pública. Si bien, la eficiencia en el gasto es un aspecto importante, la falta de inversión en la infraestructura y en el personal de salud compromete el derecho básico de los ciudadanos a recibir atención médica digna.

Entre las múltiples amenazas que hoy enfrentan los sistemas sanitarios en Argentina, destacan tres dimensiones estructurales que, entrelazadas, configuran un escenario crítico: la fragmentación institucional, el desfinanciamiento

persistente y la exclusión de las y los actores sociales de los espacios de decisión.

Fragmentación del sistema de salud

Actualmente, el sistema está dividido en tres grandes subsectores: público, obras sociales y privado. Dentro de cada uno de estos hay, a su vez, subdivisiones, que generan ineficiencia y desigualdad. Actualmente, la fragmentación es uno de los principales problemas que afectan al subsector público, junto con el desfinanciamiento y la escasa o nula participación de las y los actores sociales en la toma de decisiones.

El sistema de salud se compone por el sector público o estatal, que incluye: nación, provincias y municipios, con una cobertura del 36%; las obras sociales, que abarcan sindicatos (292) estatales (24), jubilados y pensionados (PAMI), más otras que, en conjunto, alcanzan una cobertura del 50%; y finalmente, el sector privado —que incluye medicina prepaga (300), aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) y prestadores particulares— atiende al 14% restante de la población.

Pero la fragmentación no es solo entre estos sectores, sino también dentro de cada uno de ellos. En el público, esta situación ha sido promovida por las políticas de descentralización hacia las provincias desde 1957, con la Ley 21.883, y luego hacia los municipios en la provincia de Buenos Aires, en 1994, con la Ley 11.554. Esta descentralización ha significado que la calidad de la respuesta en salud pública dependa en gran medida de los recursos económicos de cada distrito, lo que genera un panorama preocupante, pues “distritos pobres” es igual a “salud pública pobre y de mala calidad”.

En el caso de las obras sociales sindicales, éstas han evolucionado desde su concepción original como parte de la seguridad social hasta convertirse, en muchos casos, en un canal de transferencia de recursos de las y los trabajadoras y del Estado hacia el sector privado. La proliferación de estructuras administrativas ha generado costos adicionales, reduciendo los fondos destinados a la prestación efectiva de servicios de salud. Además, la segmentación dentro de las obras sociales reproduce desigualdades, dependiendo del poder y desarrollo territorial de cada organización sindical. Una parte significativa del flujo de inversión, en las últimas cinco décadas, esconde un importante subsidio del subsector público que no logra transparentarse.

Un desafío central es definir si la salud será reconocida como un derecho universal garantizado por el Estado, o si seguirá restringida a quienes cuentan con una obra social o pueden pagar un seguro médico. Desde la desregulación del sistema en 1997 a 2000, el modelo ha tendido a favorecer la selección de afiliadas y afiliados con mayor capacidad de aporte —descreme—, debilitando aún más el principio de solidaridad.

No obstante, existen estrategias que podrían mejorar la articulación entre las obras sociales y el sector público, como fomentar que las primeras cuenten con efectores propios como clínicas, sanatorios o consultorios; o bien que subcontraten con el segundo bajo condiciones que refuercen su financiamiento. También se podrían implementar compras centralizadas de medicamentos y tecnología para obtener mejores precios y condiciones.

Esta segmentación impide el acceso equitativo a la salud y favorece la mercantilización del derecho. La falta de regulación

y control sobre estos sistemas fragmentados ha generado barreras de acceso. Para revertir estas desigualdades, es fundamental avanzar hacia un sistema único de salud, gratuito, universal y de calidad, financiado por el Estado y gestionado democráticamente con la participación del pueblo y las y los trabajadores de la salud.

Desfinanciamiento crónico y precarización laboral

Impuestos generales, tasas específicas, aportes salariales y de empleadores, cuotas de seguros privados y el pago directo de parte o de la totalidad de las prestaciones, configuran las diferentes formas del siguiente modo: como con mayor o con menor predominio de una u otra. Así se genera el financiamiento de la salud.

Las políticas neoliberales han generado una situación crítica en la salud pública a partir de bajos salarios, pluriempleo, precarización laboral y escasez de insumos, que son algunas de las consecuencias de la falta de inversión estatal.

El desfinanciamiento del sistema de salud se expresa fundamentalmente en, primero, la no cobertura de vacantes tanto a nivel profesional como del resto de las y los trabajadores del sector; segundo, en salarios que están por debajo de la canasta familiar e, incluso, por debajo de la canasta básica alimentaria, situación que obliga al pluriempleo, afectando a 43% de las y los profesionales, quienes trabajan en promedio 52 horas semanales; finalmente, altos niveles de precarización laboral, que pueden rondar el 40% en algunas provincias o municipios del conurbano bonaerense. También ocurre, a nivel nacional, como en el Hospital

Posadas. La situación se ha profundizado con la introducción de la figura del monotributo en salud, es decir, una inscripción laboral para trabajar por cuenta propia sin relación laboral permanente, esto se ha dado, por ejemplo, en Convenios AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), Hospital Posadas, Garrahan, Modelo Malvinas.

Además, el desfinanciamiento impacta en forma de discontinuidades en la provisión de insumos y medicamentos para hospitales y centros de salud; deterioro edilicio y de la aparatología por falta de mantenimiento, así como en el deterioro de la cultura institucional derivado de años de aplicación de estas políticas destructivas, generando corrupción, deshumanización y pérdida de la mística en el sistema sanitario.

A pesar de que el gasto en salud es elevado, representa 9.4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB, entre 8.5 y 10, de acuerdo con otros autores), 40,000 millones de dólares al año, el Estado solo aporta entre 27 y 38%. El resto del financiamiento proviene de las obras sociales (39 a 41%) y de la medicina prepaga (28 a 29%).

Las y los trabajadores del sector salud, mayoritariamente mujeres, enfrentan jornadas extenuantes con condiciones laborales desiguales, muchas veces sin estabilidad ni garantías de derechos. En un contexto de alto nivel de feminización del sistema, la mayoría de las posiciones jerárquicas siguen siendo ocupadas por hombres, perpetuando desigualdades estructurales.

Las mujeres y diversidades sostienen la primera línea de atención, a menudo en condiciones precarias y con sobrecarga laboral. Urge revertir este escenario mediante un fortalecimiento real del financiamiento estatal y una transformación del sistema que garantice

derechos y condiciones dignas para quienes sustentan la salud.

Falta de participación popular y de perspectiva de género

La salud pública no puede quedar en manos exclusivas de personas funcionarias y técnicas que gestionan desde escritorios alejados de la realidad. La construcción de un sistema verdaderamente democrático requiere de la participación activa de las y los trabajadores de la salud, de las y los usuarios, de las organizaciones populares y de la comunidad académica.

Es fundamental incluir tanto la mirada de quienes han sido históricamente marginadas y marginados en la toma de decisiones, así como el conocimiento generado desde el ámbito académico, para enriquecer el debate y la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

Partimos de considerar que la salud es un derecho, y que es obligación del Estado garantizar ese derecho en sus diferentes niveles (nación, provincias y municipios). Sin embargo, las estrategias de descentralización y autogestión hospitalaria promovidas bajo el pretexto de “participación comunitaria” han debilitado el sistema público de salud, favoreciendo el retiro del Estado y la expansión del sector privado con fines lucrativos.

Los organismos financieros internacionales han utilizado este concepto para justificar políticas que han fragmentado aún más el acceso a la salud. En muchas ocasiones, la participación popular se ha planteado, desde el Estado, como un mecanismo para disponer de mano de obra barata o gratuita, en lugar de garantizar un verdadero involucramiento en la toma de decisiones. Personas

promotoras de salud, voluntarias en campañas de vacunación o distribución de insumos han sido ejemplos de una participación subordinada a las directrices de los gestores y técnicos, sin permitir la definición de prioridades desde las comunidades y personas trabajadoras del sector. En este sentido, la comunidad académica puede desempeñar un papel clave en la producción de conocimiento crítico que evidencie estas problemáticas y en la generación de propuestas que promuevan una participación más justa y equitativa. Ante las crisis, las organizaciones territoriales han debatido si debían reemplazar al Estado mediante iniciativas autogestivas o emplazarlo para exigir respuestas.

Si bien los esfuerzos comunitarios han sido valiosos, es fundamental que las y los promotores de salud y otros actores de base sean reconocidos como trabajadores con plenos derechos laborales, estabilidad y salarios dignos. La experiencia de los Comités de Crisis, durante la pandemia de COVID-19, mostró el potencial de la participación multisectorial cuando se articula con el Estado; aunque muchas veces estos espacios fueron impulsados por organizaciones sociales y no por voluntad gubernamental. Aquí, la comunidad académica también ha jugado un rol esencial en el análisis y sistematización de estas experiencias, aportando marcos conceptuales y evidencia empírica que permiten mejorar la coordinación entre el Estado y la sociedad civil.

Creemos que es posible y necesario avanzar en la creación de consejos populares de salud, con representación del Estado, de la fuerza laboral del sector, de organizaciones sociales y de la comunidad académica, constituidos por ley en todos los niveles —nación, provincias, municipios e incluso a nivel barrial o institucional—. Solo mediante una participación real y efectiva, sustentada en el conocimiento y la evidencia científica, podremos

construir un sistema de salud democrático, equitativo y accesible para todas y todos.

Desafíos y transformaciones necesarias

Estamos ante un momento absolutamente crítico para la salud pública, marcado por la convergencia de múltiples factores que ponen en tensión los sistemas sanitarios. Entre estos factores se encuentran el envejecimiento poblacional, el impacto del cambio climático, la transición epidemiológica y la creciente desigualdad social. Estos desafíos exigen una respuesta articulada y transformadora que garantice el derecho a la salud para toda la población.

Los retos anteriormente mencionados, como la fragmentación del sistema, la falta de integración entre los distintos niveles de atención y la disparidad en la asignación de recursos, generan barreras que afectan especialmente a los sectores más vulnerables. En este contexto, se hace imprescindible avanzar hacia modelos de atención centrados en las personas, con un enfoque preventivo y comunitario.

Además, la crisis sanitaria ha hecho patente la importancia de fortalecer la gobernanza en salud, promoviendo políticas públicas basadas en evidencia y en la participación ciudadana. En este sentido, sostenemos que la articulación entre actores estatales, privados, comunitarios y académicos es clave para construir sistemas más resilientes y sostenibles. Para enfrentar estos desafíos, es necesario repensar el rol del Estado y su capacidad de regulación y financiamiento. La inversión en salud debe ser vista como una estrategia de desarrollo y no solo como un gasto. Asimismo, la digitalización y el uso de tecnologías

innovadoras pueden contribuir a mejorar la eficiencia y la cobertura de los servicios.

Finalmente, la salud pública no puede disociarse de otros determinantes sociales como la educación, el empleo y la vivienda. La intersectorialidad debe ser un principio rector en la formulación de políticas, garantizando un enfoque integral que aborde las causas estructurales de la enfermedad y la inequidad. En este momento de encrucijada, es fundamental reafirmar el compromiso con la salud como un derecho humano universal. Solo a través de un esfuerzo conjunto y transformador será posible construir sistemas sanitarios más justos, equitativos y sostenibles para las futuras generaciones.

Como parte de algunas estrategias para construir un sistema universal, democrático y feminista, se enumeran las siguientes: un proyecto de salud universal e integrado con perspectiva de género, que implique la unificación del sector público y de las obras sociales estatales para garantizar equidad en la atención; la formación de la fuerza laboral profesional y no profesional para el sistema de salud, mediante la implementación de programas de formación integral y continua que promuevan la capacitación técnica y el desarrollo de habilidades interpersonales, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención y fortalecer la equidad en los servicios; una mayor inversión estatal, mediante el incremento del presupuesto destinado a la salud y garantías de estabilidad laboral y salarios dignos para las trabajadoras del sector; la producción pública de medicamentos y tecnologías, a través de políticas que aseguren el acceso equitativo a tratamientos y medicamentos esenciales; la creación de consejos populares de salud con participación feminista; por último, el establecimiento de espacios de participación real en la definición

de políticas sanitarias, con representación de trabajadoras, usuarias y organizaciones feministas y comunitarias.

En resumen, y a manera de conclusión, habremos de precisar que el sistema de salud pública en Argentina se encuentra en una encrucijada crítica. La actual orientación política profundiza desigualdades y reduce la cobertura para los sectores más vulnerables. Se hace imperativo un debate sobre la importancia de fortalecer el sistema público, en lugar de debilitarlo, y asegurar que la salud continúe siendo un derecho y no un privilegio accesible solo para quienes pueden pagarlo.

Garantizar un sistema de salud equitativo y eficiente exige una inversión sostenida, una regulación transparente de los recursos y una planificación integral que incluya la participación activa de las y los trabajadores de la salud, así como de las organizaciones sociales. Además, es fundamental incorporar una perspectiva de género y diversidad que asegure una atención verdaderamente inclusiva. Como ya se dijo, la construcción de un sistema único de salud no es nada más una necesidad impostergable, sino también un compromiso ético y político con la justicia social y el bienestar de toda la población.

**LA RECONSTRUCCIÓN
POSNEOLIBERAL Y EL
ESTADO DE BIENESTAR
SOCIAL EN BRASIL**

EMIR SIMÃO SADER

EMIR SIMÃO SADER¹

¹ Nacido en 1943 en São Paulo, es filósofo, sociólogo y profesor emérito. Graduado en Filosofía y con maestría en Filosofía Política por la Universidad de São Paulo. Ha ejercido la docencia en Brasil, Chile y Argentina, y defendió su tesis sobre la crisis hegemónica durante el régimen militar. Actualmente, dirige el Laboratorio de Políticas Públicas en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, investigando determinantes sociales de la salud. Es también miembro del Consejo Editorial de la *New Left Review*; aporta claves para el debate académico.



América Latina ha sido la única región del mundo que ha experimentado gobiernos antineoliberales, precisamente por haber sido también la más impactada por versiones radicales del neoliberalismo. Sin embargo, la renovación económica y social de esos gobiernos no vino acompañada por transformaciones en las estructuras del poder político.

Así, hay que preguntarse cómo fueron hasta aquí las experiencias políticas en el siglo XXI en América Latina, y en qué medida los gobiernos neoliberales y los antineoliberales han transformado el Estado y el sistema político de sus países para implementarse.

América Latina antes del neoliberalismo

A fines del siglo pasado, la región ha vivido una proliferación del neoliberalismo como en ninguna parte del mundo. ¿A qué se debe que aquí el fenómeno se ha dado con tanta intensidad y extensión?

América Latina venía de vivir su más extenso periodo de desarrollo económico, como respuesta a la crisis de 1929. Hasta aquel momento, el continente había vivido la continuidad del modelo primario exportador, predominante por un largo tiempo, desde que los colonizadores habían impuesto a nuestros países la función de abastecimiento de materias primas y productos agrícolas a las metrópolis, producidos a bajo costo, en gran medida por la utilización del trabajo esclavo.

La crisis de 1929 ha hecho temblar ese modelo, porque, a su vez, las metrópolis vivían su más grande crisis también, lo que las ha llevado a reducir al mínimo las demandas de las colonias, que han sido arrastradas así a profundos momentos de dificultades; prácticamente en todos los países del continente los gobiernos han caído. La sacudida fue tan profunda, que terminó atribuyendo al liberalismo la responsabilidad de esta etapa crítica, debido a su confianza en que el propio mercado encontraría su equilibrio.

La reacción en escala mundial, a partir de la escuela keynesiana, ha permitido la recuperación económica en plazos relativamente cortos —ayudada también por la economía bélica de la Segunda Guerra Mundial— y tuvo sus reflejos en América Latina. Algunos gobiernos, resultado de movimientos políticos antioligárquicos —de los que el caso de Getulio Vargas en Brasil fue el más evidente— ya habían empezado a reaccionar a la crisis.

El Estado brasileño ha sido reformulado con la creación de comisiones para la inducción del crecimiento de sectores específicos de la economía, a la vez que se fundaba el Ministerio del Trabajo, que ha promulgado el reconocimiento de derechos de los trabajadores, como el de la organización sindical, entre otros.

En Argentina, ya en la década anterior, gobiernos del Partido Radical implementaban proyectos de democratización del Estado con medidas antioligárquicas. Pero esos gobiernos, como se ha mencionado, también han sido víctimas de la crisis de 1929, dando lugar a que la década posterior fuera de restauración conservadora en Argentina, al contrario de otros países del continente.

En América Latina, la reacción a la crisis de 1929 ha ganado expresión teórica con el surgimiento de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), creada justamente para tratar de dar cuenta de por qué los países de otras regiones del mundo crecían, mientras que en nuestro continente no encontraban esa vía.

La propuesta del *cepalismo* ha sido el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que demandaba; a su vez, un Estado fuerte, con capacidad de inversiones, de implementación de políticas públicas y de ampliación del mercado interno; a la vez que se creaban ministerios y secretarías de planificación económica e inducción de tecnologías.

Surgía un nuevo tipo de Estado, con las más grandes transformaciones vividas por nuestros países en el plano político y económico hasta aquel momento. El continente ha experimentado su más importante ciclo largo expansivo de la economía, haciendo crecer a ésta, fortaleciendo el Estado y los liderazgos políticos, además de surgir proyectos nacionales y formas de organización nuevas de los movimientos populares: partidos, sindicatos y centrales sindicales.

El periodo que va desde los años treinta se ha extendido por el segundo lapso de posguerra con la existencia de gobiernos democráticos y nacionalistas en varios países del continente. Antes de que ese ciclo se agotara con el término de los efectos de la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea, lo que había permitido un alivio para América Latina, Estados Unidos ya había vuelto a actuar fuertemente sobre el continente. Las señales del nuevo periodo comenzaron a llegar con la caída de los Gobiernos de Vargas y de Perón, consecutivamente en 1954 y 1955; además de intentos de golpe de Estado en la región, hasta que en la década siguiente empezara el ciclo de golpes militares, empezando por Brasil en 1964, cuando el ciclo desarrollista, por el contrario, también se extinguía.

Los golpes militares puestos en práctica según la ideología de seguridad nacional, característica de la Guerra Fría bajo el liderazgo de Estados Unidos, han generado el conjunto de dictaduras militares en algunos de los países más importantes del continente: Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

Los Estados de esos países han sido militarizados; las democracias han sido destruidas, así como las organizaciones del movimiento popular. Brasil, como pudo tener su dictadura militar todavía al final del ciclo largo expansivo del capitalismo en escala mundial, pudo retomar el crecimiento de la economía, con inversiones externas de Estados Unidos, Alemania y Japón especialmente, con un modelo que excluía políticas sociales e intensificaba las desigualdades sociales y regionales del país.

En los otros países con dictadura militar, los golpes se dieron ya cuando el capitalismo internacional había ingresado a su

ciclo largo recesivo. Tales dictaduras coincidieron, así, con recesiones económicas internas; la vida de éstas ha sido más corta que la de Brasil, pero todas se agotaron en los años ochenta, promoviendo nuevos ciclos de democratización en esas naciones.

El surgimiento del neoliberalismo en América Latina

El neoliberalismo apareció en el continente todavía en el momento de las dictaduras militares. Fue en el Chile de Pinochet que, por primera vez, el neoliberalismo fue asumido por un gobierno latinoamericano, con la llegada de economistas de la Escuela de Chicago: privatizaciones, disminución del tamaño del Estado, apertura del mercado nacional a la economía internacional, promoción de la centralidad del mercado; todo ello, todavía en dictadura, demostrando que el régimen político importaba poco para que el neoliberalismo se volviera el modelo económico predominante.

El tema movilizador para que el neoliberalismo se volviera hegemónico en el continente ha sido el del desequilibrio de las cuentas públicas y de la inflación. Fue por esa vía que el neoliberalismo llegó a América Latina.

Para que ello ocurriera, hubo un desplazamiento de los consensos predominantes en las sociedades latinoamericanas. Entre esos cambios, se dio el de la percepción del Estado. Así como Ronald Reagan había enunciado, para el neoliberalismo el Estado pasó de ser una solución, a volverse un problema en la percepción de la mayoría de las personas.

En el periodo desarrollista, el Estado tuvo un rol central como sujeto del desarrollo económico, como expresión de la soberanía nacional y como inductor de las políticas públicas. Cuando ya se agotaba el periodo, el neoliberalismo llegó a tener en el Estado el blanco privilegiado de sus ataques, pues éste concentraría todos los males de la sociedad: gastos excesivos que llevarían al desequilibrio de las cuentas públicas y de la inflación; tendría un cuerpo excesivo de personas servidoras públicas, consideradas, en gran medida, ineficientes y caras; protegería, de forma indebida, al mercado interno, bloqueando al dinamismo económico e impidiendo la libre competencia que permitiría que la economía creciera.

El neoliberalismo promovió activamente un Estado mínimo y colocó al mercado en el centro de la vida social: lo que llegó a América Latina desde la extrema derecha en Chile, se expandió hasta corrientes nacionalistas en Argentina y en México, hasta llegar a la socialdemocracia, así como Brasil, Venezuela y otros países. Se ha generalizado como ningún otro modelo había logrado hacerlo en la región.

Asimismo, este modelo ha introducido la más profunda crisis de los Estados en América Latina. El debilitamiento de su accionar, el corte de sus recursos, los procesos de privatización y el debilitamiento de su capacidad de regulación del mercado, lo han reducido a su mínima expresión.

Mientras tanto, el mercado, los grandes intereses privados y las corporaciones internacionales han ocupado lugares centrales en la economía de los países ante Estados inertes e impotentes. Toda esta crisis se ha expresado de distintas formas.

Después de un fortalecimiento del accionar del Estado a lo largo de varias décadas, desde los años treinta del siglo XX, el Estado latinoamericano ha entrado en un periodo de repliegue. Como resultado de intensas campañas mediáticas de descalificación al Estado, se han impuesto consensos privatistas en la opinión pública.

La vieja polarización entre Estado y sociedad civil se ha vuelto a imponer: ésta representa la asociación de los individuos, expresando la libertad, pero que encuentra en aquél su límite. Nunca los Estados del continente habían sido reducidos a una dimensión tan limitada; nunca las economías de nuestros países han tenido una predominancia sin contrapesos, nunca los mercados internos han estado tan abiertos a los grandes conglomerados internacionales.

Ha vuelto a haber golpes, como en Brasil y en Bolivia, que han roto procesos democráticos. En el caso del primero, se ha elegido mediante mecanismos fraudulentos a un presidente de extrema derecha. Esta corriente ha ganado fuerza, por primera vez, expresada en países como Chile, Argentina y Bolivia, al elegir a bancadas parlamentarias y proyectar liderazgos de extrema derecha; además, ha pasado a ser parte de la vida política del continente.

Ha habido también intentos de superación del neoliberalismo por gobiernos progresistas en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador, México, Chile, Honduras y Perú.

Los gobiernos antineoliberales

Los gobiernos antineoliberales han surgido como reacción al hecho de que los regímenes neoliberales se habían generalizado ampliamente en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, las crisis en los principales países del continente (México, Brasil, Argentina, así como en otros países del mundo) han anunciado el agotamiento relativamente rápido del neoliberalismo.

Asimismo, los antineoliberales han aparecido a partir de las movilizaciones populares de resistencia a los neoliberales. El caracazo, en Venezuela en 1989, ha inaugurado ese tipo de resistencia popular, en respuesta a las políticas del Gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Este fue un caso típico porque pertenecía a Acción Democrática, partido vinculado a la socialdemocracia y que había gobernado con anterioridad a Venezuela mediante políticas desarrollistas. Él había, incluso, prometido un choque productivo en su campaña electoral, antes de implementar un duro ajuste fiscal con gran aumento del precio del transporte colectivo, como consecuencia del alza a los combustibles. Ante la reacción popular en el caracazo, la respuesta del gobierno llamó a intervenir a las FFAA (Fuerzas Armadas), lo que generó una masacre con gran cantidad de personas muertas. Se daba así, de manera dramática, la conversión de la socialdemocracia al neoliberalismo, proceso que ya había ocurrido en Francia y en España y que se reproduce en otros países latinoamericanos.

En 1992, tres años después del caracazo, hubo un levantamiento militar liderado por el entonces teniente-coronel Hugo Chávez,

con la pretensión de imponer un programa nacionalista en el país. Él y sus compañeros fueron apresados. Los gobiernos de los partidos tradicionales, social demócrata y demócrata cristiano, se habían adherido al neoliberalismo. En las elecciones de 1998, Chávez fue elegido presidente de Venezuela, volviéndose el primer gobierno antineoliberal en América Latina.

Algo similar ocurrió en Argentina. Carlos Menem, gobernador peronista, prometió un choque productivo, así que llamó para cuidar de la economía a un conocido economista neoliberal, Domingo Cavallo, que impuso un duro ajuste fiscal en el mismo año 1989. Era otro mecanismo de conversión de un líder de una fuerza nacionalista al neoliberalismo.

Su gobierno combinó ese ajuste neoliberal con una política de paridad del peso y el dólar como mecanismo artificial de control de la hiperinflación que se había instalado en el país; una medida que conquistó mucha popularidad, porque elevaba brusca y radicalmente el poder adquisitivo de los argentinos, además de controlar la inflación, con el peso argentino arelado al dólar. Pero era una bomba de tiempo, que generaba una gigantesca deuda pública y que explotaría poco tiempo después del fin de su gobierno.

El fin de la paridad se dio en un gobierno de Fernando de la Rúa, del Partido Radical en 2001, que mantuvo la paridad hasta que tuvo que cambiarla, por una votación, a un dólar por cuatro pesos. Esa pérdida gigantesca del poder adquisitivo de los argentinos, logrado con el mecanismo artificial de la paridad con el dólar, llevó a las más grandes agitaciones populares que el país había conocido, con la muerte de veintisiete personas por la represión en el centro de la capital. Ante eso, Fernando de la Rúa se fugó

de la Casa Rosada en helicóptero, renunciando al gobierno.

En las elecciones de 2003, un gobernador de provincia, Néstor Kirchner, derrotó a Menem y se volvió presidente de Argentina, iniciando un gobierno antineoliberal en el país. En Chile, asimismo, al final de la dictadura militar, la coalición del Partido Socialista con el Partido Demócrata Cristiano eligió, en 1990, a un primer presidente civil desde el golpe de 1973, Patricio Aylwin, de la DC. La llamada Concertación entre los dos partidos gobernó en democracia, pero mantuvo el modelo económico neoliberal, con apenas pequeños ajustes a lo largo de veinte años.

El corto gobierno de la derecha chilena, con el empresario Sebastián Piñera, fue sucedido por un candidato surgido de las manifestaciones estudiantiles de 2019, que se han transformado, en todo el país, en las más grandes que Chile ha conocido. Gabriel Boric ganó las elecciones de 2021 y se ha vuelto el presidente más joven del país.

En Bolivia y en Chile, después de tumbar a varios gobiernos, las fuerzas opositoras han fundado partidos (Movimiento al Socialismo en Bolivia, y Alianza País en Ecuador), para ganar las elecciones. Evo Morales, líder indígena y cocalero, fue elegido presidente de Bolivia en 2006, país al que ha gobernado hasta 2019. El economista Rafael Correa ha sido electo presidente de Ecuador de 2007 y hasta 2017. Ambos gobiernos han puesto en práctica políticas radicalmente antineoliberales.

En Brasil, por su parte, después de ser derrotado en tres elecciones, Lula fue elegido en 2002. Gobernó el país con un programa antineoliberal hasta 2010. Lula logró elegir como

sucesora a su principal ministra: Dilma Rousseff.

En Uruguay, el Frente Amplio, después de ser el gran protagonista de la oposición, tanto en democracia, como durante la dictadura militar, logró elegir en 2004 a Tabaré Vázquez como presidente del país. La nación también ha pasado a tener un gobierno antineoliberal.

En México, después de dos intentos anteriores, Andrés Manuel López Obrador fue electo como su presidente y comenzó a poner en práctica una política económica antineoliberal y otra de regeneración moral. Asimismo, en Honduras, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, destituido por un golpe de Estado en 2009, ha sido elegida en 2021 como presidenta de esa nación, con un programa netamente antineoliberal.

En Perú, un profesor de provincia, Pedro Castillo, resultó electo como presidente por una pequeña diferencia. Su programa fue antineoliberal, pero tuvo, en sus primeros meses de gobierno, dificultades para gobernar y poner ese programa en práctica, hasta que fue derrocado por el Congreso y apresado, asumiendo el poder su vicepresidenta, quien desplegó fuerte represión hacia los movimientos de apoyo al expresidente Castillo. El país ha entrado en un periodo de gran inestabilidad.

Esos gobiernos se han constituido en el único bloque de gobiernos antineoliberales en el mundo. Asimismo, han proyectado a los principales líderes de la izquierda en el mundo en el siglo XXI: Hugo Chávez, Lula, Néstor y Cristina Kirchner, Pepe Mujica, Evo Morales, Rafael Correa, Andrés Manuel López Obrador, Gabriel Boric y Xiomara Castro. Son gobiernos que privilegian a las políticas sociales, en lugar de los ajustes fiscales; que privilegian los procesos de integración regional, en lugar de los tratados de libre comercio

con Estados Unidos; que rescatan el rol activo del Estado, en lugar de la centralidad del mercado.

La reacción conservadora y la tercera década del siglo XXI

La nueva estrategia de la derecha para tumbar gobiernos progresistas ya no es la del golpe militar. El último intento de se dio en Venezuela, en 2002. Tardó 48 horas, pero su fracaso decretó el fin de esta práctica de la derecha, después de una larga serie de golpes promovidos por Estados Unidos en América Latina.

El nuevo tipo de golpe es la llamada *guerra híbrida*. Es una estrategia de judicialización de la política, de guerra jurídica, *lawfare*, a través de la cual se articulan instancias del poder judicial y los medios de comunicación, para promover un golpe desde dentro de los sistemas políticos.

Honduras, Paraguay y Brasil fueron los primeros casos de ese tipo de golpe. En Brasil, después de ser reelegida para un segundo mandato por el voto popular, Dilma Rousseff sufrió una destitución sin alguna acusación en que constitucionalmente cabría una denuncia. Fue acusada de malos manejos de recursos en el presupuesto, procedimiento al que todos los presidentes apelan para aprobar en el Congreso la acusación.

Para ello, los medios tuvieron un rol fundamental en promover el desgaste público de la presidenta de Brasil, alegando incapacidad para manejar la situación económica. Esto, en condiciones tales que, en el último mes del primer mandato de Dilma Rousseff, la economía había crecido como nunca antes,

y combinando ello con movilizaciones de sectores de capas medias.

Se ha articulado en los marcos del sistema político vigente, con ruptura de la democracia, por haberse dado el proceso de acusación sin razones legales, contando con la anuencia del Judiciario. Ese tipo de golpe solo es posible con una campaña sistemática en los medios, para crear el clima político favorable a la sustitución del gobierno, aún de forma ilegal. Lula fue preso e impedido de concurrir a las elecciones presidenciales de 2018, permitiendo así la victoria del extremista de derecha Jair Bolsonaro.

Después de restablecer el modelo neoliberal y efectuar un gobierno radical de derecha, autoritario, agresivo, que promovía la compra y uso de armamentos, que atacaba violentamente a la oposición política, al Judiciario, a los movimientos sociales, Bolsonaro fue derrotado en las elecciones de 2022 por Lula.

Lula asumió por tercera vez la presidencia de Brasil, exactamente veinte años después de su primer gobierno. Con alianza amplia, constituyó un gobierno democrático y antineoliberal. Poco después de asumir el cargo, la extrema derecha promovió un violento y masivo intento de golpe, que fue rápidamente derrotado.

De esa forma ha actuado la derecha también para derrocar al Gobierno de Manuel Zelaya en Honduras y de Fernando Lugo en Paraguay. El golpe en contra del Gobierno de Evo Morales, en Bolivia, se dio bajo esta forma. Las políticas provinciales se levantaron en contra del gobierno, por la decisión de una nueva candidatura del presidente a reelección, levantamiento

que fue complementado por el accionar final de las FFAA, para derrocar al gobierno.

En elecciones democráticas, el Movimiento al Socialismo (MAS) boliviano triunfó en la primera vuelta, eligiendo como presidente a Luis Arce, ministro de economía de los gobiernos anteriores del MAS. En Honduras, Xiomara Castro, esposa de Zelaya, fue elegida presidenta.

Colombia ha elegido, con Gustavo Petro, por primera vez en mucho tiempo, un gobierno democrático y antineoliberal, sumando el país al grupo de gobiernos progresistas en el continente.

Así, después de haber vivido experiencias intensas de gobiernos antineoliberales y gobiernos de restauración conservadora a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, América Latina se encuentra en su tercera década en una situación distinta. Por una parte, el continente ha contado con una serie de gobiernos antineoliberales: México, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Cuba, Venezuela y Honduras. No obstante, el continente tiene también gobiernos que mantienen o han retomado el modelo neoliberal: Ecuador, Uruguay, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

América Latina llegó a tener, por primera vez, en esa década a los tres países más importantes del continente —Argentina, México y Brasil— con políticas similares y con perspectivas que podrían liderar un conjunto mayoritario de naciones identificadas con las perspectivas antineoliberales.

En la primera ola de gobiernos antineoliberales, había identidad en la política de cada país y en la política de integración regional. Sin embargo, no había intentos de formular alternativas colectivas de políticas económicas alternas al neoliberalismo.

El escenario internacional también ha cambiado. La disputa entre la declinante hegemonía norteamericana y la ascendiente fuerza de los países favorables a un mundo multipolar caracteriza al orbe a lo largo de las próximas décadas, con consecuencias directas sobre América Latina. En los BRICS, se articulan las fuerzas propicias para un mundo multipolar con representación latinoamericana, junto a la alianza estratégica de Rusia y China, al igual que la presencia de naciones emergentes, como India, África del Sur y Arabia Saudita, entre otros países petroleros.

En el plano de la economía mundial, aunque debilitado, sigue predominando el modelo hegemónico neoliberal. Es en ese escenario que se insertan las nuevas tendencias en América Latina en la tercera década del siglo XXI. Después de éste, extremadamente favorable al antineoliberalismo, una nueva situación surge en el continente, en que los gobiernos antineoliberales se limitan a Brasil, México, Uruguay, Venezuela y Honduras. Colombia vive un gobierno que enfrenta grandes dificultades para implementar su programa, originalmente antineoliberal.

La historia reciente de América Latina está marcada por una profunda disputa entre dos grandes proyectos de país, de región y de mundo: el neoliberalismo, que convirtió al mercado en el centro del orden social; y el antineoliberalismo, que, desde la resistencia popular, ha luchado por recuperar la centralidad de lo público, del Estado y de los derechos colectivos.

Durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, el continente ha sido escenario de experiencias intensas, a veces contradictorias, pero siempre cargadas de lecciones fundamentales. Desde las revueltas populares que anunciaron el fin del consenso neoliberal, hasta el surgimiento de gobiernos profundamente comprometidos con los derechos sociales, la soberanía nacional y la integración regional, América Latina ha sido un laboratorio político mundial.

Los gobiernos antineoliberales no han sido homogéneos ni inmunes a contradicciones. Pero compartieron —y comparten aún— una apuesta clara: desmontar el legado de desigualdad, exclusión y saqueo que dejó el neoliberalismo. Frente a los ajustes fiscales, impulsaron políticas sociales; frente a la apertura comercial desregulada, defendieron la integración regional soberana; frente al Estado mínimo, promovieron el rol activo del Estado como garante de derechos.

Como se ha dicho, la tercera década del siglo XXI encuentra al continente en un nuevo momento de inflexión. Entre avances, retrocesos y gobiernos que reafirman su vocación popular y otros que retoman las recetas más extremas del neoliberalismo, se configura un escenario complejo, pero cargado de posibilidad.

Hoy, el desafío no es solo resistir al neoliberalismo, sino construir alternativas sostenibles, democráticas y profundamente enraizadas en las luchas de los pueblos. La articulación con los BRICS, la disputa por un orden multipolar, la defensa de los bienes comunes, el feminismo popular, el ambientalismo con justicia social y el fortalecimiento de las democracias populares son claves en ese horizonte.

**DESTRUCCIÓN NEOLIBERAL
Y RECONSTRUCCIÓN DE
LOS DERECHOS SOCIALES
EN MÉXICO. PERSPECTIVAS
TRANSFORMADORAS
DESDE EL ISSSTE**

MARTÍ BATRES GUADARRAMA

MARTÍ BATRES GUADARRAMA ¹

¹ Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, Maestro en Trabajo Social por la misma universidad y abogado de formación inicial. Cuenta con diplomados en Gerencia Política y en Políticas Sociales Urbanas. Asimismo, en su fructífera carrera política, ha ocupado un sinnúmero de cargos de relevancia nacional, tales como: Presidente de la Cámara de Senadores, Senador, Diputado del Congreso de la Unión, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Secretario de Gobierno y Secretario de Desarrollo Social de esa entidad. Actualmente, es el Director General del ISSSTE. Su experiencia académica y política respaldan su compromiso con la salud y el bienestar social.



México está viviendo una etapa de transformaciones importantes, transformaciones profundas que avanzan por la vía pacífica. A diferencia de otros procesos vividos en anteriores momentos históricos, en este contexto, la seguridad social es uno de los grandes temas de la transformación nacional.

La seguridad social es una de las ramas más importantes del derecho social en el plano jurídico y, sobre todo, uno de los pilares fundamentales de nuestro «estado de bienestar», caracterizado por la diversidad e integralidad de sus políticas sociales. Tiene su origen en los primeros seguros que conquistaron, con sus luchas, las y los trabajadores, los obreros industriales y el movimiento sindical: seguros por accidentes laborales, por edad avanzada, cesantía, invalidez, así como los sistemas de jubilación y pensiones de las personas servidoras públicas.

Con el tiempo, se extendieron para cubrir a las familias de trabajadores y trabajadoras —cónyuges e hijos— mediante seguros de salud, pensiones de viudez y orfandad, guarderías y estancias infantiles, sistemas de abasto, tiendas, préstamos, programas de vivienda social, servicios turísticos, entre otras prestaciones. Por ello, esta seguridad es un resultado de la conquista del pueblo de México. Las primeras referencias a lo que más tarde se conformaría como nuestro Sistema

de Seguridad Social se encuentran en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre sus antecedentes figuran la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (1925) y el Estatuto de los Trabajadores del Estado (1938). En 1943 nace el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y en 1959 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A lo largo de los años, se consolidaron otras instituciones específicas, por ejemplo: en 1965, Pemex estableció su Sistema de Servicios Sociales y de Seguridad; en 1969, el Estado de México creó el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM); y en 1976, las Fuerzas Armadas crearon su propio organismo de seguridad social.

Entre los años cuarenta y sesenta, la seguridad social vivió su “época de oro”: crecieron la inversión, la infraestructura y el número de hospitales y se fortalecieron tanto jubilaciones como pensiones y presupuestos. El IMSS y el ISSSTE —instituciones provenientes de grandes oleadas de la lucha obrera— fueron los motores de ese auge.

El IMSS es resultado del ciclo de movilizaciones de la etapa cardenista, entre 1934-1940; y el ISSSTE, del alud de los movimientos de trabajadores dado entre 1956 y 1959. La creación del ISSSTE fue una conquista obtenida gracias a la lucha de telegrafistas, ferrocarrileros y, de manera decisiva, del movimiento magisterial encabezado por el profesor Othón Salazar Ramírez.

Pero pese a tales logros, la seguridad social nació dividida y mantuvo esa fragmentación incluso en su mejor etapa. No nace

como un sistema único de seguridad, ni siquiera para todas las personas trabajadoras, sino como un entramado escindido.

Por su parte, el ISSSTE surge en ese panorama: nunca se concibió su fusión con el IMSS, ni se pensó en avanzar hacia la construcción de un sistema verdaderamente universal. Estos límites afianzaron la cultura de compartimentación impuesta por el régimen político.

Esta fragmentación explicaría la supervivencia de direcciones estatales de Pensiones Civiles y la creación de decenas de esquemas especiales en múltiples instituciones. De allí derivaron pensiones complementarias que solo benefician a grupos reducidos de trabajadores y trabajadoras: universidades, personal de empresas como Pemex o CFE y, de manera especial, del sector financiero, como Banxico, Nafinsa y otros, donde se dio el origen de los llamados regímenes especiales de pensiones a “burocracias doradas”.

Ello confirma que, pese a su época de auge, la seguridad social arrastraba dos grandes limitaciones: la persistente fragmentación institucional y su dependencia del empleo formal, circunstancia que dejó fuera a millones de personas dedicadas al trabajo informal o no asalariado. Sin embargo, lejos de resolver estos problemas estructurales, el propio neoliberalismo los profundizó y generó otros adicionales.

Una de las medidas más significativas y difíciles de revertir fue la privatización parcial de las pensiones mediante la creación de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) en 1997, esquema extendido en 2007 a las y los trabajadores del Estado. Este modelo capitalista desplazó el esquema del reparto

solidario al introducir las cuentas individuales, rompiendo la solidaridad intergeneracional. Por supuesto, los sectores informales y precarizados quedaron excluidos, aumentando no solo la fragmentación, sino la brecha y la desigualdad en el acceso a prestaciones y, especialmente, a las pensiones.

En el sector salud, se implementó el Seguro Popular, que acentuó las desigualdades regionales y disminuyó la calidad en la atención; de igual forma, impulsó la subrogación masiva de servicios a empresas privadas, debilitando la capacidad directa del sistema público. Algunos estados consolidaron redes básicas de atención; otros, con menos recursos, sufrieron graves carencias durante todo el periodo neoliberal. Aún más, la subrogación de servicios a empresas privadas debilitó la infraestructura pública; tal fue el caso del desvío de recursos vía contratos opacos, lo que redujo la inversión pública en hospitales, equipamiento y personal especializado. Poco se sabe hasta ahora sobre estos procesos de privatización interna en diversas instituciones.

Por ejemplo, en el ISSSTE, las tareas esenciales terminaron en manos de particulares. El conjunto de la articulación de servicios, equipamientos, insumos y personal fue aportado por las compañías privadas, contratadas bajo los sistemas de servicios integrales. La tendencia era convertir, en este caso al Instituto, en una especie de franquicia que ponía el nombre al frente, pero detrás funcionaban diversas empresas de este tipo.

Por otra parte, debemos agregar que con el Seguro Popular se introdujo el sistema de copago, con dos defectos clave: la cuota familiar requerida para incorporarse y la subrogación masiva de servicios a instituciones privadas. Paralelamente, la

precarización laboral, producto de la flexibilización del mercado en este rubro, incrementó el empleo informal y excluyó a millones de trabajadoras y trabajadores del acceso a la seguridad social. El sistema se debilitó: cayeron las contribuciones obligatorias y aumentó la desigualdad en el acceso a servicios de salud, pensiones y muchas otras prestaciones.

Las reformas laborales de 2012 flexibilizaron el mercado de trabajo bajo la promesa de aumentar la competitividad, pero en la realidad llevaron a la informalidad a casi 60% de la fuerza laboral en 2018. La expansión del *outsourcing*, el régimen de subcontratación, dejó a millones de personas trabajadoras sin contratos formales ni acceso a pensiones, servicios médicos, seguros contra riesgos y reparto de utilidades.

En términos de financiamiento, las contribuciones obligatorias al IMSS se estancaron. El modelo neoliberal convirtió derechos sociales en servicios mercantilizados: los créditos de vivienda se orientaron a fomentar desarrollos inmobiliarios, que resultaron frecuentemente inaccesibles para las personas con menor ingreso.

La seguridad social en el primer gobierno de la Cuarta Transformación

El primer gobierno de la Cuarta Transformación, liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, emprendió numerosas acciones para revertir las políticas neoliberales que desarticulaban la seguridad social en México, con el objetivo de fortalecer el carácter universal, solidario y público del sistema.

Uno de los ejes centrales fue la revocación progresiva de las subrogaciones privadas y el fortalecimiento del sistema público.

El gobierno redujo la dependencia de proveedores privados en la prestación de servicios médicos, buscando robustecer la infraestructura estatal y su capacidad de respuesta. Este esfuerzo incluyó fuertes inversiones en hospitales, clínicas y equipamiento médico, así como la contratación de médicos y especialistas para cubrir el déficit en áreas rurales y marginadas. Hasta el momento, se han incorporado servicios clave como imagenología, hemodinamia y anestesia, y está en marcha el proceso para hacer lo propio con laboratorios clínicos, banco de sangre y osteosíntesis.

Al mismo tiempo, se procuró disminuir las subrogaciones de las atenciones médicas directas. En un esfuerzo por revertir la privatización acumulada, se nacionalizaron diversos hospitales que habían sido construidos bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP), en las cuales lo público quedaba al servicio de lo privado. Esta estrategia de recuperación de servicios de salud, combinada con otras reformas en materia laboral, permitió fortalecer de manera significativa el sistema de salud y, con ello, la seguridad social. Basta señalar que, en 2018, el sector público sanitario contaba con 35,398 establecimientos; mientras que para 2023 ya sumaban 39,735. Asimismo, el gasto per cápita en salud pasó de \$6,234 pesos en 2018 a \$8,202 en 2023.

Junto a esta política de recuperación del sector público, se consolidó el IMSS-Bienestar como modelo de atención universal. Esta institución fue creada para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, sustituyendo al Seguro Popular. Bajo este nuevo esquema, se centralizaron los servicios con un enfoque público y solidario, eliminando la fragmentación y reduciendo las desigualdades regionales generadas durante

el periodo neoliberal. Con su puesta en marcha, se aseguró la cobertura de salud para más de 65 millones de personas sin afiliación, lo que además supuso la contratación y mejora de las condiciones laborales del personal sanitario.

Como parte de esta transformación, se impulsó también la federalización del sistema de salud. Mediante convenios con los gobiernos estatales, se estableció que los servicios fueran gestionados directamente por la Federación. Hasta ahora, veintitrés entidades han formalizado su incorporación al IMSS-Bienestar. Este proceso ha sido acompañado por mejoras en infraestructura hospitalaria, abasto de medicamentos y contratación de personal médico en regiones históricamente marginadas.

En el marco de esta reconfiguración institucional, se implementó el programa La Clínica es Nuestra, el cual permitió impulsar un proceso de rehabilitación, equipamiento y mantenimiento de las unidades médicas de primer nivel, bajo un esquema de participación social directa que fortalece la apropiación comunitaria de los servicios.

Paralelamente, se trabajó para garantizar el abasto de medicamentos y avanzar hacia la gratuidad plena de los servicios. Para ello, se adoptaron estrategias de centralización de compras y distribución, orientadas a combatir la corrupción y asegurar el suministro oportuno.

Otro aspecto prioritario fue la mejora de las condiciones laborales del personal de salud: se regularizó la situación de miles de trabajadoras y trabajadores que durante años laboraron con contratos temporales o eventuales; la Cuarta

Transformación priorizó su basificación y el fortalecimiento de sus prestaciones, avanzando así hacia un sistema más justo y estable para quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de los servicios públicos de salud.

Al mismo tiempo, se amplió la cobertura de los programas sociales con funciones de asistencia y prestaciones. Entre 2018 y 2024, el presupuesto para estos programas alcanzó los \$1.5 billones de pesos. Además, se fortalecieron iniciativas fundamentales como la Pensión Universal para Personas Adultas Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que aumentó el umbral mínimo de bienestar y fortaleció la red de protección social.

En el terreno de las pensiones laborales, se impulsaron reformas sustanciales: se redujo el número de semanas de cotización necesarias para acceder a los beneficios del sistema de capitalización individual —que hasta entonces obligaba a laborar durante más de 45 años—, y se incrementaron las aportaciones patronales de 6.5 a 15%. Asimismo, se redujeron las comisiones cobradas por los bancos que gestionan los fondos de pensión de las y los trabajadores, aliviando con ello la carga financiera sobre las personas aseguradas.

Una medida fundamental, en este periodo, fue el incremento del salario mínimo, que pasó de \$88.36 diarios en 2018 a \$248.93 en 2024, lo que representa un alza real de 182%, y acumulada de 242%. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento fue aún mayor, alcanzando los \$374.89. Esta medida no solo permitió mejorar las condiciones de vida de millones de trabajadoras y trabajadores, sino que también incrementó las aportaciones al sistema y fortaleció el acceso a las prestaciones

sociales. Se estima que, gracias a esta política, 4.1 millones de personas salieron de la pobreza extrema. El aumento al salario mínimo impulsó el del salario general y, con ello, crecieron también los ingresos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo reformas laborales estructurales para erradicar el *outsourcing*, lo que derivó en la incorporación masiva de aproximadamente tres millones de personas trabajadoras reconocidas por sus empleadores reales. Esto les permitió formar parte de las nóminas formales y, por ende, del Sistema de Seguridad Social, lo cual también contribuyó a aumentar los ingresos del IMSS. La reforma no únicamente garantizó el acceso a prestaciones, sino que aseguró el reparto de utilidades, proyectando un incremento de 100 mil millones de pesos tan solo entre 2021 y 2022. Con esta transformación se dio un paso decisivo para reestructurar las relaciones de trabajo en el país y reafirmar el papel del Estado como garante del empleo digno y del respeto a los derechos laborales.

En el ámbito de la vivienda, la Cuarta Transformación enfrentó el desafío de revertir las políticas neoliberales que fragmentaron el acceso a este derecho social. Durante el periodo anterior, los programas estuvieron enfocados en esquemas de financiamiento orientados al mercado, con beneficios principalmente para desarrolladoras inmobiliarias privadas, lo que resultó en la construcción de viviendas de baja calidad, ubicadas en zonas periféricas y sin acceso adecuado a servicios básicos.

Por su parte, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) priorizó la asignación de subsidios para la mejora, ampliación o

autoconstrucción de viviendas en comunidades indígenas y rurales, con un enfoque especial en grupos históricamente vulnerados. En esa misma línea, se reconoció la importancia de la autoproducción y la autoconstrucción asistida como alternativas viables y necesarias para enfrentar el déficit habitacional. Este cambio de enfoque fortaleció la autonomía de las familias en la construcción de su vivienda y permitió introducir herramientas para asegurar la calidad y la sostenibilidad de los proyectos, marcando así un giro significativo en la política de vivienda en México.

Por si fuera poco, se reestructuraron profundamente las funciones del INFONAVIT y el FOVISSSTE. En las administraciones neoliberales, la intermediación de las inmobiliarias influyó de forma negativa en la especulación de precios y en la baja calidad de las viviendas. Durante la Cuarta Transformación, se eliminó esa intervención, permitiendo que los créditos pasaran directamente del fondo a la persona trabajadora, quien ahora puede comprar suelo, o construir, o mejorar su vivienda, sin intermediarios. Esta medida aumentó la transparencia, redujo la corrupción y eliminó prácticas abusivas, como los créditos impagables, entre otras. Asimismo, se impulsaron esquemas de financiamiento más flexibles, se promovió el uso del saldo de la subcuenta de vivienda para la autoconstrucción y se facilitaron sustituciones de créditos denominados en las UMA (Unidad de Medida y Actualización) a pesos, con quitas y cancelaciones de adeudos acumulados injustos.

En paralelo, se trabajó para garantizar la regularización de la tenencia de la tierra, otorgando títulos de propiedad a miles de familias, especialmente en zonas urbanas marginadas. Esta medida buscó brindar certeza jurídica a los hogares, mejorar su

acceso a servicios básicos como agua, electricidad y transporte, y consolidar el derecho a una vivienda adecuada.

Otro elemento relevante fue la expansión del Banco del Bienestar. Con más de tres mil sucursales operando en todo el país, esta institución se convirtió en la red bancaria más grande de México. Su papel ha sido clave para apoyar a las y los derechohabientes en el acceso a servicios financieros, incluyendo el cobro de programas sociales sin comisiones, particularmente en regiones donde no existía infraestructura bancaria.

Finalmente, se impulsó la incorporación de tecnologías verdes en la infraestructura hospitalaria. En contraste con décadas de omisión en políticas ambientales, el Gobierno Federal promovió la instalación de paneles solares y sistemas de eficiencia energética en hospitales, logrando así ahorros significativos y reduciendo la huella de carbono producida por los servicios de salud públicos.

Lo anterior ha permitido fortalecer la seguridad social durante la primera etapa de la Cuarta Transformación. No obstante, es importante subrayar que tanto el IMSS como el IMSS-Bienestar resultaron fortalecidos con las medidas implementadas en los últimos años. Sin embargo, el sistema de seguridad social mexicano enfrenta aún importantes desafíos.

La seguridad social en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación

Ahora bien, ¿qué imaginamos para el Segundo Piso de la Cuarta Transformación en materia de seguridad social?

Se busca afianzar los procesos de nacionalización de la seguridad social en todos los órganos. Esto implica dar continuidad a los llamados servicios integrales, lo cual requiere un gran esfuerzo institucional: la sustitución de equipo e insumos, así como la necesaria articulación de diversas disciplinas para su implementación en las instancias de seguridad social.

Del mismo modo, se busca garantizar cobertura en los llamados “desiertos de atención en salud”, es decir, aquellas zonas donde hay una escasa o nula presencia institucional. La atención a estas regiones implica una gran responsabilidad, especialmente considerando que en algunas hay concentración de servicios, mientras que otras permanecen desatendidas.

Por ello también se plantea mejorar la infraestructura sanitaria. Existe una legítima demanda por parte de la derechohabiente de contar con una mejora continua, especialmente en la infraestructura de primer nivel, que es la que tiene contacto directo y cotidiano con la mayoría de las personas usuarias, sin descuidar el segundo y tercer niveles de atención.

Otro reto relevante tiene que ver con las condiciones laborales dentro de las instituciones. Es necesario avanzar en la integración de trabajadoras y trabajadores a mejores condiciones, así como en una mejor distribución del personal de salud y su contratación, particularmente en instituciones como el ISSSTE. Esto implica la homologación de tales condiciones, un proceso que es necesariamente gradual y progresivo.

Un aspecto fundamental es garantizar el abasto continuo y suficiente de medicamentos, así como reducir los tiempos de espera en clínicas y hospitales. Más aún, es crucial construir una

cultura preventiva en materia de salud. Comúnmente, se piensa que fortalecer el sistema sanitario es sinónimo de construir más hospitales; sin embargo, el mejor sistema es aquel en el que las personas requieren menos atención hospitalaria, gracias a la fuerza de sus políticas de prevención. A mayor prevención, menor hospitalización y una sociedad más sana.

Relacionado con ello, nuestros principales índices de mortalidad se relacionan con enfermedades como infartos, hipertensión y diabetes. Ésta, en particular, es una enfermedad ligada a la elevada industrialización de los alimentos, una tendencia que se intensificó durante la época neoliberal; ante ello, se requiere revertirla a través de mayores medidas preventivas, entre otras.

Asimismo, resulta imprescindible relanzar el conjunto de prestaciones sociales que integran la seguridad social, poniendo especial énfasis en dos ámbitos clave: por un lado, el sistema de cuidados, que debe fortalecer tanto las Estancias de Bienestar para el Desarrollo Infantil, como las Casas de Día para Personas Adultas Mayores; por otro lado, la política de vivienda, donde se han dado pasos importantes, mediante instituciones como el Infonavit, y en la cual es necesario profundizar para garantizar hogares dignos y accesibles para la población trabajadora.

Todas estas medidas se sustentan sobre pilares fundamentales que buscan transformar profundamente la operación de las políticas públicas en materia de seguridad social. La primera condición para ello es la articulación efectiva entre instituciones. Solo mediante una coordinación sectorial sólida será posible avanzar hacia un sistema único, coherente y solidario, capaz de garantizar cobertura integral y sin fragmentación.

Junto a esta articulación, se requiere colocar en el centro de todas las decisiones a las personas derechohabientes y usuarias. La cultura institucional debe modificarse para reconocer que en la cúspide de toda estructura pública no debe estar la norma administrativa ni la lógica burocrática, sino la experiencia, además del bienestar de quienes reciben los servicios.

Este enfoque humanista obliga también a reconstruir el tejido de solidaridad que hace posible el cuidado. La seguridad social no puede entenderse únicamente como un entramado institucional, sino como un sistema vivo que se sostiene sobre redes afectivas y comunitarias de apoyo mutuo. Integrar a las familias, a las comunidades organizadas y a los territorios como sujetos activos del cuidado es indispensable para romper con el aislamiento y el abandono promovido por el modelo neoliberal. Asimismo, las instituciones deben apostar decididamente por recuperar la cercanía con la sociedad. La seguridad social no puede operar desde la distancia, el anonimato ni la frialdad tecnocráticas. Las y los derechohabientes exigen vínculos humanos, accesibles, respetuosos y empáticos, donde sean tratados no como clientes o beneficiarios pasivos, sino como personas con derechos plenos.

Este proceso requiere también fomentar una participación social genuina, que vaya más allá de la consulta simbólica. La apropiación comunitaria de las políticas públicas, como lo demuestra el programa La Clínica es Nuestra, fortalece la legitimidad institucional, mejora la eficiencia del gasto y recupera la confianza popular en las capacidades del Estado. La participación no es un adorno, sino un principio metodológico de transformación.

Por último, la transformación de fondo debe apoyarse en un uso estratégico y ético de las tecnologías digitales. El Estado debe abandonar prácticas obsoletas que siguen exigiendo trámites presenciales innecesarios, y avanzar hacia sistemas automatizados, transparentes y centrados en las personas. Las tecnologías deben servir para ampliar la cobertura, facilitar el acceso, mejorar la prevención y garantizar una atención médica más oportuna, en especial en las regiones más apartadas. La telemedicina, el expediente electrónico y las plataformas de atención deben convertirse en herramientas centrales de una seguridad social moderna y con justicia territorial. En este contexto, resulta fundamental asumir una filosofía de Estado en la que éste se conciba como un aparato eficaz para el cumplimiento de sus responsabilidades sociales. Debemos inculcar, tanto en quienes integran los Sistemas de Seguridad Social como en la sociedad en su conjunto, la idea de que la seguridad social es una tarea estratégica del Estado. Este es, además, un combate ideológico, pues durante el neoliberalismo se promovió la noción de la responsabilidad individual como justificación para el retiro del Estado de sus compromisos sociales.

Por ello, no se trata únicamente de recuperar o reconstruir el Sistema de Seguridad Social mirando al pasado —a la llamada época de oro del siglo XX—, sino también de fijar la vista hacia adelante, asegurando que la reconstrucción de nuestro Sistema de Seguridad Social tenga un horizonte unificado, universal y transformador.

EL ROL DE LAS Y LOS INTELECTUALES EN UN ESTADO DE BIENESTAR

JUANA ELVIRA SUÁREZ CONEJERO

JUANA ELVIRA SUÁREZ CONEJERO¹

¹ Doctora en Sociología de la Universidad Católica de Lovaina, máster de la misma universidad y licenciada en Cibernética Matemática de la Universidad de La Habana. Cuenta con más de treinta años de experiencia en docencia e investigación social. Actualmente, es la Coordinadora de Asesoras y Asesores del Director del ISSSTE. Es docente en la Unidad de Posgrado de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su trayectoria internacional y su participación en múltiples proyectos la posicionan como una voz innovadora en la intersección de la salud, la educación y la sociedad.



La transformación de la seguridad social y la salud en un Estado posneoliberal necesita, sin duda alguna, de cambios estructurales de fondo. Sin embargo, hay una esfera que también resulta imprescindible transformar, si queremos construir algo nuevo: la esfera de la subjetividad, de la cultura, de las ideas, porque esta esfera no solo moldea las formas en que nos representamos el mundo, sino que también guía nuestro actuar. Y para transformar, hay que cambiar las conciencias, hay que cambiar las maneras de pensar. En ese entendido, las y los intelectuales, en tanto que portavoces ideológicos, jugamos un papel fundamental.

Dividiremos este escrito en cuatro partes: primero hablaremos teóricamente acerca de las personas intelectuales y su relación con la producción cultural de una sociedad; en un segundo momento, veremos críticamente cuáles fueron los roles jugados por la intelectualidad durante el periodo neoliberal; en tercer lugar, analizaremos las características que debe tener la intelectualidad posneoliberal para el bienestar; y finalmente, llevaremos estas ideas a la praxis que hacemos en la actualidad desde el ISSSTE.

Intelectuales y hegemonía

La figura de la persona intelectual, desde la perspectiva gramsciana, se sitúa en el corazón mismo de la lucha por la hegemonía, es decir, por la capacidad de una clase social para imponer su visión del mundo sobre las demás. En su obra *Cuadernos de la cárcel*, Antonio Gramsci desarrolla una reflexión fundamental sobre el papel de las y los intelectuales en las estructuras sociales y políticas, mostrando cómo, más allá de su labor como pensadoras y pensadores, su función esencial es contribuir a la consolidación del poder de la clase dominante. Para él no son agentes neutros ni imparciales; su trabajo está profundamente imbricado con los intereses de las clases sociales a las que pertenecen o a las que sirven.

Gramsci introduce dos categorías de intelectuales, las cuales son cruciales para entender este proceso. Un tipo de intelectual es quien, aunque pueda no estar directamente ligado a una clase social dominante, se percibe a sí misma, a sí mismo, como independiente y autónomo, fuera de cualquier influencia o presión de clase. Estas personas mantienen la ilusión de una objetividad y neutralidad de su saber. Sin embargo, suelen contribuir de manera indirecta al mantenimiento del *status quo*, pues sus marcos conceptuales y visiones del mundo responden a los intereses de la clase dominante, aunque no siempre lo hagan conscientemente. Los y las intelectuales tradicionales operan dentro de un campo cultural que tiende a naturalizar el orden social, sin desafiarlo explícitamente.

En contraste, para Gramsci hay otro tipo de intelectuales: quienes surgen directamente de las clases sociales dominadas

o subalternas, y tienen la función de articular y difundir las aspiraciones y las luchas de esas clases. Su principal tarea no es solo la de gestionar el saber, sino también la de crear una identidad colectiva para su clase, unificando su lucha y promoviendo una visión alternativa del mundo. Estas y estos intelectuales tienen una función política crucial: son los encargados de construir y mantener una contrahegemonía, una visión del mundo que se opone al consenso dominante, cuestionando las ideas y los valores impuestos por las clases hegemónicas.

La hegemonía cultural, entonces, no se logra únicamente a través de la dominación política directa o la fuerza militar, sino por medio de la construcción de un consenso que involucra las esferas culturales, educativas y mediáticas. Las y los intelectuales, en tanto productores de discursos, símbolos y significados, desempeñan un papel central en este proceso.

A través de las instituciones educativas, los medios de comunicación y los espacios académicos, las ideas —dominantes— de la clase dominante se imponen como las “verdaderas” o “naturales” en la sociedad, moldeando el sentido común colectivo. Así, las clases subalternas son inducidas a aceptar las condiciones de su subordinación como algo inevitable, incluso deseable. Este consenso cultural se convierte en una forma de coerción consentida, en la que la clase hegemónica no necesita recurrir a la violencia o la represión para mantener su poder, sino que logra la “complicidad” de las clases subordinadas.

Es importante señalar que la hegemonía cultural no es un proceso estático ni definitivo. De acuerdo con Gramsci, la hegemonía está siempre en disputa, lo cual implica que la

clase dominante debe estar constantemente reafirmando y renovando su influencia a través de la producción cultural. Ello, porque no es suficiente que una ideología o visión del mundo se imponga y ya; la lucha por la hegemonía es un proceso continuo, en el que las clases subordinadas también pueden intervenir y tratar de disputar el sentido común dominante. Aquí es donde entra en juego la noción de contrahegemonía: un proceso mediante el cual las y los intelectuales orgánicos de las clases dominadas trabajan para cuestionar y reconfigurar la visión del mundo que legitima la dominación.

La tarea de una parte de la intelectualidad, entonces, es fundamental en la construcción de alternativas. Deben desafiar la visión naturalizada del mundo y poner en evidencia los mecanismos a través de los cuales la clase dominante mantiene su poder. Esto implica no solo cuestionar las ideas y los marcos de pensamiento existentes, sino también crear y difundir nuevas narrativas, nuevas formas de entender y de organizar la sociedad.

En esta lucha, las y los intelectuales desempeñan un papel de mediación entre las luchas sociales y las estructuras culturales que las representan, dando forma y sentido a las demandas de los movimientos populares, obreros, feministas, ecologistas, entre otros.

Es por ello que la relación entre la intelectualidad y el poder es fundamental y multidimensional. Las personas intelectuales no solo pueden ser vehículos de la ideología dominante, sino también agentes de cambio social que articulan las demandas de las clases subalternas. En ese sentido, Gramsci señala que pueden ser una herramienta tanto de la clase hegemónica como

de las clases subalternas. Esta dualidad resalta la importancia de la lucha cultural en cualquier proceso de cambio social. No se trata únicamente de cambiar las relaciones de poder, sino de transformar las ideas y los valores que sostienen el orden de la sociedad.

A través de esta reflexión teórica, Gramsci nos ofrece las claves para entender cómo la lucha por la hegemonía cultural es central en cualquier proceso de transformación social.

La intelectualidad en el neoliberalismo

El neoliberalismo es, más que un modelo económico, una racionalidad que permeó todas las esferas de la vida social y, de manera particular, el ámbito intelectual. No impuso su hegemonía mediante la fuerza, sino a través de una sofisticada ingeniería cultural que transformó nuestra manera de pensar, de interpretar el mundo y de situarnos en él. Su éxito no se debió solo a la imposición de políticas económicas específicas, sino a su capacidad de reconfigurar el sentido común, de hacer que determinadas ideas parecieran naturales e inevitables mientras otras eran ridiculizadas, marginadas o simplemente invisibilizadas.

Aunque el tema de la crítica lo trataremos con profundidad más adelante, es importante señalar, para comprender la instrumentalización neoliberal de la intelectualidad, que el neoliberalismo no prohibió la crítica, sino que la neutralizó. La vació de contenido, la fragmentó, la condujo hacia terrenos inofensivos. Permitió el debate siempre y cuando éste no pusiera en cuestión los principios sobre los que se sostiene la lógica del mercado, la mercantilización de la vida, la privatización de lo público.

De este modo, la crítica quedó reducida a una serie de observaciones marginales que, lejos de amenazar al sistema, lo legitimaron al presentarlo como perfectible. No era necesario prohibir la disidencia, bastaba con moldearla hasta hacerla compatible con el orden existente. En resumen, una opción funcionalista.

En este proceso, las y los intelectuales jugamos un papel fundamental. Se nos ofrecieron incentivos para alejarnos de la política, para refugiarnos en la especialización extrema, para fragmentar el conocimiento en parcelas cada vez más inaccesibles. El pensamiento dejó de ser una herramienta de transformación y se convirtió en un ejercicio de prestigio individual, en una competencia por la acumulación de capital académico, por el reconocimiento en círculos cada vez más cerrados. La academia, en lugar de ser un espacio de producción de conocimiento emancipador, se convirtió en una maquinaria burocrática donde la relevancia de una idea no se mide por su capacidad de cambiar la realidad, sino por su adecuación a criterios institucionales y su circulación en revistas indexadas.

Pero la “domesticación neoliberal” no solo se dio a nivel estructural, sino también subjetivo. Se nos inculcó la idea de que la precariedad era un rasgo inherente a la vida intelectual, que el sacrificio era una prueba de autenticidad, y que la inestabilidad era el precio que se debía pagar por el privilegio de pensar.

Se nos enseñó a asumir la falta de seguridad laboral como un signo de excelencia, a competir entre nosotros en lugar de organizarnos colectivamente, a vernos como emprendedores del conocimiento en un mercado de ideas, donde cada uno debía negociar su propio valor, y sobre todo, se nos hizo creer

que cualquier intento de cuestionar estas condiciones era una queja infundada, una resistencia “infantil” a las reglas del juego.

El neoliberalismo nos formó para ser funcionales a su lógica, para ser intelectuales que reflexionaran sin incomodar, que criticaran sin subvertir, que describieran sin transformar. Nos empujó a la autocensura disfrazada de prudencia, a la parálisis disfrazada de escepticismo, a la pasividad disfrazada de sofisticación teórica. Nos hizo desconfiar de la acción colectiva, ridiculizar las utopías y considerar ingenuo cualquier intento de pensar más allá de los márgenes que nos impuso.

Su triunfo no consistió en imponernos una ideología explícita, sino en hacernos creer que habíamos llegado al fin de las ideologías. Nos convenció de que la historia ya no tiene dirección, que las grandes narrativas emancipadoras fueron errores del pasado, que la única opción es administrar lo que hay, gestionar las crisis, adaptarnos a un mundo donde el cambio estructural es imposible y donde cualquier alternativa sería peor. Se nos inculcó la resignación como virtud intelectual, la idea de que lo único serio era describir la realidad con frialdad, sin permitirnos imaginar otros mundos posibles.

En esta reconfiguración del pensamiento, el lenguaje también fue clave. Se nos enseñó a hablar de eficiencia en lugar de justicia, de competitividad en lugar de derechos, de crecimiento en lugar de bienestar. Se nos instruyó para evitar términos que evocaran conflicto o antagonismo, para adoptar una retórica de consenso donde las desigualdades eran “desafíos” y no injusticias, donde la pobreza era un problema técnico y no una consecuencia del poder. Se nos inculcó una gramática del neoliberalismo en la que las palabras perdieron su carga

política y se convirtieron en herramientas de gestión.

Así, el pensamiento crítico quedó encapsulado en análisis cada vez más especializados, cada vez más desconectados de la realidad concreta, cada vez más irrelevantes para quienes no formaban parte de los circuitos académicos. No se nos impidió pensar, pero se nos enseñó a hacerlo de una manera en que no representásemos una amenaza real. El neoliberalismo construyó intelectuales tradicionales, mudos, mientras se dismantelaban los derechos sociales, se precarizaba el trabajo, se mercantilizaban todas las esferas de la vida social y se erosionaba cualquier noción de lo público.

Este proceso no fue automático ni homogéneo, pero fue efectivo. Nos vendieron la idea de que ser un intelectual significaba mantenerse al margen, no comprometerse con causas concretas, no tomar partido. Intentaron convencernos de que la radicalidad era sinónimo de irracionalidad, que la pasión era una amenaza a la objetividad, y que la política era ajena a la academia. El neoliberalismo también nos educó para ser observadores, no para ser actores; para comentar la historia, no para intervenir en ella.

Un ejemplo claro y tangible de cómo el neoliberalismo instrumentalizó a la intelectualidad es lo sucedido en el sector salud, y cuyos efectos aún enfrentamos hoy en el ISSSTE: la transformación de la gestión hospitalaria y el acceso a los servicios médicos bajo la lógica de eficiencia y rentabilidad.

Durante décadas, el sistema de salud en México se estructuró bajo el principio de que la atención médica era un derecho garantizado por el Estado, financiado colectivamente a través

de la seguridad social y los impuestos. No era perfecto, pero se basaba en la solidaridad. La planificación hospitalaria y de servicios sanitarios respondía a necesidades poblacionales: se construían hospitales donde había déficits de acceso; se formaba personal médico y de enfermería con una visión de servicio público, y el abastecimiento de medicamentos se concebía como una obligación estatal, no como una oportunidad de negocio.

Sin embargo, con la llegada del neoliberalismo, este modelo fue desmontado progresivamente y sustituido por una lógica empresarial, donde los hospitales dejaron de verse como espacios de garantía del derecho a la salud y comenzaron a ser administrados como si fueran unidades productivas. Este cambio no ocurrió de manera explícita, mediante una declaración abierta de privatización, sino que se implementó a través de mecanismos sutiles, legitimados por una intelectualidad que, muchas veces, fue funcional a este proceso.

Y el lenguaje cambió. Aparecieron nuevas palabras: gestión del riesgo, incentivos de calidad, empoderamiento, resiliencia, ecosistemas de salud, cartera de servicios, proveedores de servicios, *coaching*, consumidores de productos de salud, industria de la salud, seguros de salud, sostenibilidad financiera, asociaciones público-privadas, entre otras.

Economistas de la salud, administradores hospitalarios, consultores internacionales y académicos en políticas públicas fueron impulsando la idea de que el problema del sistema de salubridad no era la falta de inversión pública, sino su “ineficiencia”.

Se argumentó que los hospitales del ISSSTE tenían demasiado personal, que los procesos administrativos eran lentos, que la compra de insumos debía optimizarse, que se gastaba demasiado en consultas y hospitalizaciones. Se empezó a medir la atención médica con indicadores de productividad: cuántas consultas atiende por turno cada doctora o doctor, cuántas cirugías se realizan por quirófano, cuánto cuesta cada día de hospitalización por paciente.

Esta lógica llevó a un cambio en la forma de gestionar el ISSSTE. Se comenzaron a subrogar servicios a empresas privadas bajo el argumento de que era más barato tercerizar la limpieza, el mantenimiento, la distribución de medicamentos e incluso los laboratorios y estudios de imagen.

Al mismo tiempo, se promovió la idea de que los hospitales públicos debían generar ingresos propios, cobrando cuotas de recuperación o permitiendo la entrada de capital privado en ciertos servicios, y se diseñaron esquemas de compra de medicamentos basados en criterios de costo-beneficio, priorizando la reducción del gasto sobre la cobertura integral de las necesidades médicas.

La consecuencia de esta transformación fue el debilitamiento del sistema público de salud. A medida que se reducían las plantillas de personal médico y de enfermería, en nombre de la eficiencia, aumentaban los tiempos de espera para consultas y cirugías; a medida que se tercerizaban los servicios, se perdía capacidad de respuesta y control sobre la calidad de la atención; a medida que se optimizaban los presupuestos, se generaban desabastos de medicamentos e insumos básicos.

Y lo más grave es que esta precarización del sistema fue presentada como una modernización. La intelectualidad que promovió estos cambios creía realmente que estaba mejorando la gestión hospitalaria. No hubo una conspiración abierta para privatizar la salud, sino un proceso ideológico donde se asumió que la eficiencia empresarial era el camino para hacer sostenible el sistema.

Las consecuencias de esta visión son hoy palpables: hospitales saturados, falta de médicos y enfermeras, infraestructura insuficiente, desabasto de medicamentos y equipos. Pero lo más importante es que esta crisis no es resultado de una fatalidad ni de un colapso natural del sistema, sino de un proceso ideológico y político en el que parte de la intelectualidad jugó un papel central al validar la transformación del derecho a la salud en un servicio sujeto a criterios de mercado.

Hoy, gracias a ello, luego de años y años de estas políticas empresariales en el sector, tenemos centros de salud saturados, falta de médicas, médicos, especialistas y generales, así como personal de enfermería y sanitario en general, infraestructura insuficiente, desabasto de medicamentos e insumos, servicios subrogados, y un gran etcétera.

¡Parece que el Estado no era tan ineficiente como nos dijeron! Otro caso es cómo el neoliberalismo transformó la prevención y la promoción de la salud en un campo de gestión tecnocrática, despojándolo de su dimensión política y reduciéndolo a un problema de responsabilidad individual. Bajo esta lógica, los condicionamientos estructurales de la salud —como la pobreza, la desigualdad, el acceso a servicios de calidad y las condiciones laborales fueron desplazados del debate y

reemplazados por discursos centrados en el autocuidado y la toma de decisiones personales.

Ejemplo claro es cómo se nos hizo creer que la obesidad y la diabetes —y otras enfermedades que ni se mencionan— eran simplemente el resultado de elecciones individuales equivocadas: mala alimentación, falta de ejercicio, hábitos poco saludables. Desde esta perspectiva, la tarea de los profesionales de la salud y de los intelectuales en el campo fue diseñar campañas que “concientizaran” a la población sobre los riesgos de su comportamiento y promover cambios en el estilo de vida, con un discurso que culpabilizaba a los obesos, a los diabéticos y, en general, a los enfermos crónicos, por los gastos que le ocasionaban al sistema de salud sus malas decisiones personales.

El problema es que este enfoque ignoraba deliberadamente el entorno en el que esas decisiones se tomaban: la disponibilidad de alimentos saludables, la capacidad económica para acceder a ellos, la presión de las jornadas laborales extendidas, la falta de espacios adecuados para la actividad física, la agresiva mercadotecnia de productos ultraprocesados. Al igual que muchas personas creyeron la narrativa de que “el pobre es pobre porque quiere”, gran cantidad de intelectuales vinculados al sistema de salud y de seguridad social creyeron también que “los obesos son obesos porque quieren”, que “los enfermos renales crónicos son unos irresponsables” y otras narrativas similares.

Intelectuales y académicos en salud pública no fueron censurados, pero sí se les condujo a pensar que la manera “científicamente seria” de abordar el problema era limitarse a descripciones técnicas y estadísticas, sin señalar que estas

condiciones eran producto de decisiones políticas deliberadas.

Así, el discurso de la promoción de la salud se convirtió en una serie de recomendaciones higienistas que responsabilizaban a los individuos, mientras se omitía la crítica a las estructuras económicas que generaban las enfermedades. En casos como el del ISSSTE, la figura del promotor de la salud, e incluso la palabra promoción, desaparecieron prácticamente tanto en el discurso como en las estructuras.

En lugar de denunciar el papel de las grandes corporaciones en la crisis de salud pública, se “entrenó” a la intelectualidad para hablar de “factores de riesgo” y “estilos de vida”. En lugar de exigir regulaciones que protegieran a la población de entornos obesogénicos, se enseñó a diseñar intervenciones focalizadas, dirigidas a modificar el comportamiento de los sectores más vulnerables, sin cuestionar las causas de su vulnerabilidad. Se inculcó la idea de que la salud es una cuestión de educación y no de justicia social.

Este tipo de pensamiento fue producto de la “domesticación neoliberal” de la academia. No se trata solo de que las industrias de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas hayan cabildeado para evitar regulaciones; se trata de que el pensamiento neoliberal logró instalarse en la propia producción de conocimiento, de manera que las soluciones estructurales ni siquiera aparecían como opciones en la discusión. Y cuando alguien las planteaba, se le acusaba de ideologización, de querer politizar un tema que, se nos decía, debería ser tratado con objetividad técnica.

El resultado fue que la promoción de la salud se convirtió en un campo donde se hablaba mucho de responsabilidad personal y muy poco de regulación, donde se priorizaban las campañas de concientización sobre los cambios estructurales, donde la prevención era vista como un problema de gestión y no como una lucha política.

No es casualidad que las intervenciones más aceptadas fueran aquellas que no incomodaban al mercado: talleres sobre nutrición, en lugar de impuestos a los refrescos; aplicaciones de conteo de calorías, en lugar de etiquetados de advertencia claros; campañas para “motivar” a hacer ejercicios, en lugar de políticas para reducir la jornada laboral y permitir más tiempo libre.

Este es un ejemplo claro de cómo el neoliberalismo no solo cambió la forma en que se diseñaban las políticas públicas, sino también la manera en que las y los intelectuales en salud conceptualizaban los problemas. No fue necesario prohibir el pensamiento crítico sobre las condicionantes sociales de ésta; bastó con desacreditarlo como poco científico, poco práctico o excesivamente ideológico. Y así, los grandes problemas de salud pública siguieron siendo abordados con soluciones individualizadas y parciales, mientras el modelo económico que los generaba permanecía intacto.

Hoy, debido a ello, luego de años y años de este tipo de campañas, no tenemos un obeso menos, no tenemos un diabético menos, tampoco tenemos un hipertenso menos. ¡Todo lo contrario!

La intelectualidad posneoliberal para el bienestar

En un estado de bienestar, la teoría de la intelectualidad de Antonio Gramsci cobra especial relevancia porque permite comprender cómo se generan, legitiman y transforman las ideas que sustentan el modelo de sociedad. Aplicar la distinción entre intelectuales tradicionales y orgánicos, dentro de un estado de bienestar, es útil no solo para entender las dinámicas del conocimiento y la política, sino también para fortalecer la relación entre el pensamiento crítico y la toma de decisiones.

Retomemos a Gramsci. Las personas intelectuales, en un estado de bienestar, se identifican con aquellas que provienen de instituciones consolidadas: universidades, academias y otras estructuras de producción de conocimiento. Son figuras que han sido históricamente reconocidas como guardianes del saber, cuya legitimidad proviene de su capacidad de análisis y su dominio de disciplinas específicas. En muchos casos, han sido actores fundamentales en la construcción de políticas públicas, asesorando gobiernos, diseñando modelos económicos y sociales, y participando en debates sobre el futuro del Estado.

Aunque ellas mismas se perciban como independientes, su pensamiento está inevitablemente influido por la estructura social en la que operan. Esto significa que, en un estado de bienestar en proceso de construcción o consolidación, es fundamental identificar qué sectores de la intelectualidad tradicional pueden aportar a la transformación y cuáles han quedado atrapados en esquemas de pensamiento que reproducen la lógica neoliberal.

Por otro lado, hay diferentes intelectuales dentro de un estado de bienestar: son quienes surgen directamente de los movimientos sociales, de las luchas sindicales, del activismo comunitario y de las organizaciones populares. No se trata necesariamente de académicos o especialistas con formación formal, sino de personas que han construido conocimientos desde la práctica, enfrentando las contradicciones del sistema y generando respuestas concretas a los problemas sociales. En muchos casos, no son reconocidas como tales por las estructuras tradicionales del saber, pero su rol en la transformación social es fundamental.

En este sentido, el estado de bienestar deberá articular una relación dialéctica entre ambas formas de intelectualidad, permitiendo que el conocimiento producido desde la experiencia cotidiana se combine con el análisis estructural y la formulación de políticas públicas.

Un ejemplo concreto de esta articulación es el diseño de programas de salud pública que no solo incorporen las visiones de médicas, médicos y profesionales de la salud, sino que también tomen en cuenta la experiencia de las y los trabajadores del sector, de las comunidades organizadas y de las personas derechohabientes. Lo mismo ocurre en el ámbito laboral, las mejores reformas en materia de derechos de la fuerza laboral han surgido cuando ésta y los académicos han actuado juntos, combinando el análisis técnico con la experiencia directa de quienes viven las condiciones de trabajo día a día.

Para que esta articulación sea efectiva, el Estado debe generar mecanismos que permitan la participación activa de esta intelectualidad en el diseño y evaluación de políticas

públicas. No basta con reconocer su existencia; es necesario institucionalizar espacios de diálogo donde sus voces tengan peso real. Lo anterior puede materializarse a través de consejos ciudadanos, foros de consulta, estructuras de coestión en sectores estratégicos o incluso programas de formación, los cuales permitan que adquieran herramientas que fortalezcan su incidencia en el debate público.

Por otro lado, es importante que los y las intelectuales asuman una actitud crítica frente a su propio rol. En un estado de bienestar, su tarea no es únicamente producir conocimiento en abstracto, sino contribuir activamente a la construcción de políticas que respondan a las necesidades de la sociedad. Esto implica romper con la idea de que la academia y la política son esferas separadas y reconocer que el conocimiento tiene una dimensión política ineludible.

Gramsci nos alerta también sobre el riesgo de que las y los intelectuales se conviertan en meros legitimadores del poder. En un estado de bienestar en consolidación, puede haber una tendencia a buscar validación académica para justificar decisiones ya tomadas, en lugar de fomentar un verdadero debate crítico. Para evitar esto es necesario que los espacios de producción de conocimiento mantengan su autonomía y que se promueva una cultura política que valore el disenso como parte del proceso de toma de decisiones.

En última instancia, el reto de un estado de bienestar es construir una intelectualidad que no interprete nada más la realidad, sino que también contribuya a transformarla. La paridad dialéctica entre personas intelectuales y políticas no significa una relación de subordinación de unas sobre otras; sino

un proceso de construcción conjunta en el que el conocimiento, la experiencia y la acción se articulan para dar respuesta a las necesidades sociales. Solo así se podrá consolidar un modelo que no únicamente garantice derechos, sino que también genere las condiciones para que la sociedad participe activamente en la definición de su propio destino.

Por fortuna para México, llegó la Cuarta Transformación, en tanto que estado de bienestar posneoliberal. El papel de las y los intelectuales en él no puede ser el de meros observadores de la realidad, ni el de tecnócratas que administran lo existente. Debemos asumir un rol activo en la construcción de un nuevo paradigma que supere las inercias del neoliberalismo, no solo en términos económicos, sino además en su profunda influencia en la producción del conocimiento, en la definición de lo posible y lo imposible, y en la manera en que entendemos nuestra función social.

Como ya comentamos, durante décadas, el neoliberalismo nos inculcó la idea de que el pensamiento crítico debía ser aséptico, que la neutralidad era un valor supremo, que la academia debía mantenerse distante de la política. Sin embargo, la neutralidad no existe: el conocimiento siempre responde a intereses y prioridades. La pregunta “entonces” es ¿a qué intereses servimos y qué tipo de conocimiento estamos dispuestos a producir para una sociedad que busca reconstruir sus derechos colectivos?

En el estado de bienestar posneoliberal de la 4T, las personas intelectuales debemos recuperar el sentido político de nuestro trabajo. Esto no significa abandonar el rigor académico ni sustituir la investigación por consignas ideológicas, sino

comprender que la producción del conocimiento tiene consecuencias materiales, que lo que escribimos y enseñamos influye en las decisiones que se toman y en la forma en que las sociedades entienden sus problemas y sus soluciones.

No podemos seguir operando bajo la lógica neoliberal que nos formó como especialistas fragmentados, aislados en nuestras disciplinas, enfocados en problemas que muchas veces solo interesan a círculos reducidos. Un estado de bienestar necesita intelectuales con pensamiento complejo, como sostiene Edgar Morin, que construyan pensamiento al servicio de la sociedad, que dialoguen con los movimientos sociales, que contribuyan a la elaboración de políticas públicas desde una perspectiva comprometida con la justicia social.

En un estado de bienestar posneoliberal, la producción del conocimiento no puede estar subordinada a lógicas de prestigio individual. Necesitamos reconstruir una academia que recupere su vocación social, priorice la investigación aplicada a la resolución de los problemas colectivos, y que genere herramientas conceptuales para la acción y no solo para el debate entre especialistas.

Esto exige también un replanteamiento de la forma en que se forman las y los nuevos intelectuales. Durante el neoliberalismo, la universidad fue reconfigurada como una fábrica de capital humano para el mercado, y la formación de pensamiento se vio reducida a la adquisición de competencias funcionales para la empleabilidad.

De ahí que quizás el reto más grande para las y los intelectuales en esta nueva etapa es reconstruir la relación entre el conocimiento

y la sociedad. Durante demasiado tiempo, la academia se aisló en su propio lenguaje, en sus propias métricas, en sus propios circuitos de validación.

En un estado de bienestar posneoliberal, el saber debe volver a ser accesible, estar al servicio de las mayorías y ser una herramienta de empoderamiento colectivo. No se trata solo de divulgar el conocimiento, sino de democratizar su producción; romper con la lógica elitista que ha caracterizado a muchos espacios intelectuales; y reconocer que la construcción del saber ocurre, sí, en las universidades, pero también en los movimientos sociales, en las comunidades organizadas, en los espacios de lucha por los derechos.

La crítica intelectual en un estado de bienestar posneoliberal ocupa una posición crucial en la reconstrucción de las relaciones sociales, económicas y políticas que fueron profundamente moldeadas por el neoliberalismo y debe ser radicalmente distinta. Debe dejar de ser funcional al sistema y convertirse en una herramienta de transformación que cuestione las estructuras de poder que sostienen la inequidad social y económica. Debe partir del reconocimiento de que el modelo neoliberal ha generado una crisis estructural en los países, despojando a amplios sectores de la población de sus derechos fundamentales y que ahonda la desigualdad.

El estado de bienestar posneoliberal implica, pues, una reconstrucción de los principios que deben guiar la organización social, donde el bienestar de todos los ciudadanos sea una prioridad. Por lo tanto, la crítica intelectual, en este nuevo contexto, debe abordar los aspectos técnicos y económicos de las políticas públicas, así como las ideologías que subyacen

al modelo neoliberal. El neoliberalismo no solo impuso un cambio económico, también en la forma de pensar y en las concepciones de la justicia social, la solidaridad y la equidad.

En vez de concebir el bienestar como un gasto o una carga, la intelectualidad debe luchar por redefinirlo como una inversión en el futuro colectivo. La crítica debe buscar desmontar la narrativa que presenta al estado de bienestar como ineficiente y, en su lugar, promover una visión alternativa que vea al Estado como un actor clave en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

El papel de la crítica intelectual en el estado de bienestar posneoliberal también pasa por recuperar una visión integral de los derechos sociales. En un contexto neoliberal, estos fueron tratados como un lujo o un gasto innecesario, y las políticas públicas, diseñadas con la premisa de que la intervención estatal debía ser mínima. La crítica intelectual debe ser una voz en contra de la privatización de lo público, defendiendo la idea de que el acceso universal a la salud, la educación y la seguridad social son derechos humanos, no privilegios.

Además, la crítica intelectual debe desafiar la concepción del individuo como un ente aislado y competitivo, característica fundamental del neoliberalismo; debe subrayar la importancia de los bienes comunes, entendidos no únicamente en términos materiales, sino también en términos de la cohesión social, la solidaridad y la cooperación. En lugar de promover un modelo basado en la competencia y el individualismo, las y los intelectuales deben impulsar una visión de la sociedad basada en el apoyo mutuo y la justicia social, que se reconozca en el valor de los servicios públicos y el bienestar colectivo.

Las y los intelectuales en un estado de bienestar posneoliberal deben ser también agentes de cambio social, no solo productores de conocimiento teórico. La crítica tiene que ser una herramienta para el análisis, y además para la acción política. Deben trabajar en conjunto con los movimientos sociales, con los actores políticos comprometidos con la transformación y con la ciudadanía en general, para crear un nuevo modelo de bienestar que sea inclusivo y que garantice los derechos de todas las personas, especialmente las más vulnerables.

En resumen, la crítica intelectual en el estado de bienestar posneoliberal no debe ser únicamente un cuestionamiento de las políticas neoliberales, sino también una construcción de alternativas que apunten a una sociedad más justa, equitativa y solidaria. Esta crítica debe estar vinculada a la acción política y debe promover un cambio de paradigma en la organización social, en el que el bienestar colectivo y el acceso universal a los derechos sociales sean los principios rectores. La intelectualidad debe recuperar su papel como agente transformador, capaz de desafiar las estructuras de poder y de proponer soluciones que realmente benefician a toda la sociedad.

Una mirada desde el ISSSTE

Para cerrar este análisis, es esencial reflexionar sobre cómo podemos articular el pensamiento científico y la intelectualidad con la acción política en el ISSSTE, de manera que no solo respondamos a las necesidades inmediatas del sistema de salud; sino que también avancemos hacia una transformación profunda en la forma en que entendemos y organizamos la seguridad social en México.

En primer lugar, en el ISSSTE, estamos construyendo una articulación profunda y efectiva entre el pensamiento científico, la intelectualidad crítica y la acción política, de modo que el sistema sanitario resuelva problemas inmediatos, pero además sea capaz de provocar un cambio estructural hacia un modelo de bienestar verdaderamente accesible y justo para todas y todos los derechohabientes. Este proceso no lo queremos limitar a la implementación de políticas públicas desde un enfoque técnico o aislado, sino que debe ser un proceso integral, dinámico y reflexivo, que tenga como base la participación activa de todos los actores involucrados en el sistema de salud.

Queremos generar espacios dentro del ISSSTE, en los que el pensamiento científico y la reflexión académica sean elementos fundamentales para la toma de decisiones. Estos espacios deberán ser capaces de incorporar la crítica y el razonamiento sobre las estructuras actuales del sistema sanitario, cuestionando tanto los marcos neoliberales que han dominado en las últimas décadas, como los modelos tradicionales que pueden haber quedado obsoletos.

Vamos a fomentar, desde la base institucional, una cultura de análisis profundo, en la que los datos y la investigación científica no solo sirvan para responder a problemas inmediatos, sino para predecir, prevenir y transformar las tendencias que afectan a la salubridad de la población. Así, lo que se construya no será una mera gestión sanitaria; será más bien una verdadera praxis política orientada a la transformación de las condiciones sociales y económicas que determinan la salud de las personas.

Este pensamiento crítico lo concebimos en una doble dirección: por un lado, hacia dentro del ISSSTE, impulsando una

renovación que permita repensar la forma en que trabajamos y nos relacionamos con las y los derechohabientes; por otro lado, vamos a proyectarnos hacia fuera, con un enfoque social que nos posibilite conectar con sus demandas, necesidades y realidades. Este enfoque fomentará un pensamiento inclusivo que no se limita a lo académico o a lo técnico, sino que integra las experiencias y conocimientos de la derechohabiencia, las comunidades y los grupos más vulnerables, permitiendo que sus voces se escuchen de forma efectiva en la toma de decisiones.

Una de las acciones clave es el fortalecimiento de un modelo de participación activa y abierta para que puedan lo mismo acceder a los servicios de salud, así como ser partícipes en la construcción de políticas y estrategias que respondan a sus necesidades específicas, como hicimos con las asambleas del programa La Clínica es Nuestra. Este modelo permite a la derechohabiencia del ISSSTE ser parte de las decisiones que les afectan directamente.

El pensamiento científico que promovemos se orienta hacia la construcción de un estado de bienestar que, además de garantizar la cobertura universal en salud, fomente una visión integradora de la seguridad social. En lugar de centrarnos únicamente en la atención curativa o de emergencia; en el ISSSTE trabajamos para construir un sistema sanitario que se enfoque en la prevención y la integración de servicios médicos con otras dimensiones del bienestar social, como la educación, la vivienda y el trabajo digno.

Uno de los pasos más importantes será la próxima creación del Consejo Científico del ISSSTE. Este consejo será un órgano compuesto por personas expertas internas y externas, que contribuyan de manera efectiva en la construcción de estrategias

basadas en resultados de investigaciones científicas, pero siempre con un enfoque social y político. La función principal de este consejo será proponer y evaluar investigaciones, analizar las tendencias en salud y seguridad social, y proponer intervenciones innovadoras y políticas públicas que vayan más allá de la lógica asistencialista.

Será un espacio de colaboración interinstitucional y multidisciplinario en el que confluirán diversas disciplinas y perspectivas: desde la medicina hasta las ciencias sociales. Esta diversidad de enfoques permitirá desarrollar propuestas que respondan a los problemas técnicos de la salud, y que estén impregnadas de un enfoque crítico sobre el papel del Estado y la sociedad en la creación de condiciones de bienestar.

A través de este espacio de colaboración y pensamiento crítico, el ISSSTE establecerá alianzas con universidades, centros de investigación, organizaciones sociales y otros actores que contribuyan a la reflexión y praxis en torno a la salud y la seguridad social.

Finalmente, trabajamos para garantizar que el pensamiento científico y la acción política no se disocien, sino que se retroalimenten constantemente. En este sentido, cada avance en el conocimiento será acompañado de cambios reales en el funcionamiento del ISSSTE, pues no puede quedar en los cajones de las y los intelectuales, sino que debe ser transformado en políticas públicas concretas que mejoren la calidad de vida de nuestras personas derechohabientes, garantizando que la salud no sea un privilegio, sino un derecho universal.

Lo que vamos a hacer es construir sinergias entre el pensamiento

intelectual y la praxis política, de modo que las ciencias no queden separadas de la acción cotidiana, y los saberes adquiridos se traduzcan en cambios palpables y significativos en la derechohabencia.

Esto solo será posible si la intelectualidad, la crítica constructiva, el pensamiento científico y la acción política se entrelazan y trabajan juntos en una visión común de un estado de bienestar posneoliberal, comprometido con la Cuarta Transformación, la justicia social y la equidad.

SOCIALCONFORMISMO EN RED: EL CONTROL DE LA CONCIENCIA

MARCOS ROITMAN ROSENMAN

MARCOS ROITMAN ROSENMANN¹

¹ Nacido en Santiago en 1955 y nacionalizado español, es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor titular en la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado obras sobre política, democracia y golpes de Estado en América Latina. Ha sido profesor invitado en diversas universidades, especialmente en México. Su enfoque interdisciplinario en la relación entre política, sociedad y salud enriquece el debate académico.



El sistema se defiende. El cibercapitalismo adopta formas impensables para anular la capacidad de pensar. El cerebro tiende a ser vago, a seguir el camino más corto para alcanzar una meta. No le gusta trabajar demasiado; se agota y sin incentivos acaba por apagarse. En su lugar, emerge un robot alegre o, mejor dicho, un operador sistémico. El socialconformismo ha evolucionado en las formas de articular las conductas tanto colectivas como personales. Es decir, si bien no deja de ser:

un comportamiento cuyo rasgo más característico es la adopción de conductas inhibitorias de la conciencia en el proceso de construcción de la realidad. Se presenta como un rechazo hacia cualquier tipo de actitud que conlleve enfrentamiento o contradicción con el poder legalmente constituido. Su articulación social está determinada por la creación de valores y símbolos que tienden a justificar dicha inhibición en favor de un mejor proceso de adaptación al sistema-entorno al cual se pertenece.

Hoy, el vínculo entre ser social, naturaleza y realidad se ve alterado por una nueva mediación que se interpone entre la naturaleza de nuestra especie y la construcción social de la realidad, modificando las conductas. Los proyectos políticos de cambio social, así como la construcción de sujetos, de fuerzas y movimientos, tenían como finalidad forjar una sociedad asentada sobre el bien común y el interés general.

Bajo los principios de igualdad, justicia social y democracia, las fuerzas sociales buscaban romper un poder político excluyente y plutocrático. En la actualidad, el capitalismo digital, gracias

al desarrollo de la cibernética, la informática y la inteligencia artificial (IA), se nos presenta un mundo nuevo, que desplaza la realidad social. Nace la realidad virtual. Y en su campo, el ser humano deja de percibir su naturaleza como un espacio para la cooperación. Se desentiende de los valores éticos propios de la condición humana.

La especie humana ha entrado en una peligrosa deriva: la deshumanización. Las formas de control social y las técnicas de dominación se han multiplicado. Sus consecuencias se dejan sentir en todos los ámbitos de la vida social. Lentamente, la cibernética e informática constituyen la base de un nuevo mundo, en el cual el ser humano se convierte en un adminículo de la inteligencia artificial. El recurso al *big data* y la IA se han convertido en un mantra para solucionar todo tipo de problemas. A medida que los algoritmos copan la vida cotidiana, un sistema binario, cuya función consiste en hacer más comfortable la existencia, provoca que el pensamiento crítico entre en crisis.

En este contexto, la mente cerebro se adecua a una nueva realidad, esta vez, adjetivada como virtual, donde el pensar es una opción, más que una facultad. En la realidad virtual, todo está resuelto. Es un mundo donde la forma de comunicarse (el lenguaje), queda incorporado a una manera de percibir la realidad desde la ficción de recrear sensaciones y emociones construidas como modelos. Se puede jugar, viajar, tener relaciones sexuales, participar de operaciones quirúrgicas, cometer asesinatos.

En otras palabras, se busca que el ser humano sea capaz de reproducir sus emociones desde una plataforma y sus

aplicaciones. Así, se entra en una dimensión desconocida. La mente-cerebro inicia un proceso de “reseteo” para reconstruir su mundo. Adquiere nuevas habilidades, al tiempo que abandona maneras de pensar y actuar propias del mundo analógico. Es el comienzo de una etapa de transformación solo posible gracias a la transición del capitalismo analógico al capitalismo digital. La Red acaba imponiendo conductas y hábitos, si no provoca cambio en la manera en la cual el cerebro organiza sus funciones. Así lo expresa Nicholas Carr (2018) en su ensayo *Superficiales*:

Empecé a ver que la Red estaba ejerciendo una influencia mucho mayor sobre mí que la que había tenido mi viejo ordenador de mesa. No era solo que estuviera empleando tantísimo tiempo en mirar una pantalla de ordenador. No era solo que muchos de mis hábitos y rutinas estaban transformándose mientras me acomodaba cada vez más a, y hacía dependiente de, las páginas y servicios de la Red. El modo mismo en que mi cerebro funcionaba parecía estar cambiando. Fue entonces cuando empecé a preocuparme por mi incapacidad para prestar atención a una sola cosa durante más de dos minutos. Al principio pensé que el problema era un síntoma de degradación mental propia de la madurez. Pero mi cerebro, comprendí, no solo estaba disperso. Estaba hambriento. Exigía ser alimentado de la manera en que lo alimentaba la Red, y cuanto más comía, más hambre tenía. Incluso cuando estaba alejado de mi ordenador, sentía ansias de mirar mi correo, hacer *clik* en vínculos, *googlear*. Quería estar *conectado*. Al igual que *Microsoft Word* me había convertido en un procesador de textos de carne y hueso, Internet, me daba cuenta, estaba convirtiéndome en algo parecido a una máquina de procesamiento de datos de alta velocidad... (p. 29).

Resulta significativo que sea la adicción de la mente-cerebro la que acabe por definir las acciones que el *homo sapiens*, *sapiens*, realiza. En otros términos, es la mente-cerebro la que tiene el control sobre la manera de percibir el mundo, estar

en él y construirlo a partir de las experiencias a las cuales nos referenciamos. Traemos un mundo a la mano y somos coparticipes de su desarrollo, es decir:

De hecho estas experiencias —o muchas otras similares— contienen de manera capsular todo el sabor esencial de lo que queremos decir. Porque nos están mostrando de qué manera nuestra experiencia está amarrada a nuestra estructura de una forma indisoluble. No vemos el “espacio” del mundo, vivimos nuestro campo visual; no vemos los “colores” del mundo, vivimos nuestro espacio cromático. Sin lugar a duda [...] estamos en un mundo. Pero cuando examinemos más de cerca cómo es que llegamos a conocer ese mundo, siempre nos encontraremos con que no podemos separar nuestra historia de acciones —biológicas y sociales— de cómo nos aparece ese mundo. Es obvio y cercano que es lo más difícil de ver (Maturana y Varela, 1990, p. 18).

En este orden de cosas, asistimos a una reprogramación, donde se trata de separar lo biológico y lo social, al extremo de hacer de la realidad virtual el principio explicativo de las relaciones sociales. Un factor que juega en esta dirección lo constituye la aceleración del tiempo digital. Su estructura cambia por completo la percepción del mundo. Nuestra vida se articula al uso de información casi instantánea en la Red. Nuestra conducta se ve afectada por los mismos dispositivos que son cada vez más complejos en su manejo, a la par que se convierten en un apéndice de nuestra existencia.

Así, mientras las cosas se vuelven más sofisticadas, yo me vuelvo más estúpido en relación con ellas; de hecho, pierdo mis conocimientos prácticos y culturales. Esta es una consecuencia natural de la devaluación incesante de la experiencia a través de la innovación. También me alieno de las cosas que poseo en el sentido de que me siento mal porque no las trato como debo. De esta manera, si tengo algún sentimiento respecto de ellas, es de culpa. Ellas son tan valiosas e inteligentes, y yo las trato torpemente. Esto, por desgracia, se aplica no solamente a los

equipos (el *hardware*), sino también a los programas (el *software*) (Hartmut, 2016, p. 153).

Pensar desde el sistema y buscar la manera de vivir en su interior, para comprender sus mecanismos, nos sitúa en un nivel de supeditación. Nos convertimos en adminículos de los dispositivos inteligentes. En este sentido, según Sadin (2022) es necesario abordar las dinámicas del capitalismo digital:

desde nuevos fundamentos, no solo según los engranajes económicos que las determinan, las concepciones del mundo y de lo humano que las determinan [...] sino bajo un prisma totalmente diferente [...] su impacto sobre nuestra psicología individual y colectiva. Porque quizá comprendamos recién hoy [...] hasta qué punto las tecnologías digitales modificaron nuestras mentalidades casi de modo insidioso, hasta qué punto contribuyeron a la adopción de posiciones inéditas, redefinieron la relación habitual con lo real, con los demás y con gran número de marcos que determinaban hasta ahora la vida en común, a partir del hecho de una dimensión nodal que se fue forjando poco a poco y que sigue estando hasta el día de hoy bastante escondida: una representación inflada de uno mismo (pp. 39-40).

Y más adelante, Sadin (2022) pone de manifiesto el significado de la emergencia del individuo tirano: “Vivimos el momento inaugural de la generalización de los modos de existencia secundados por sistemas. Y ahí se produce la distinción entre ciudadano e individuo” (pp. 39-40).

Del capitalismo analógico al capitalismo digital

La peor catástrofe provocada por la acción del hombre, tras la Segunda Guerra Mundial, es una pandemia de transmisión zoonótica que ha paralizado al planeta. Es la consecuencia de un orden de dominación y explotación, el capitalismo, que no ha

tenido límites en transformar la vida en mercancía. Naturaleza y seres humanos son expropiados, enajenados de manera violenta, de sus derechos. Han sido muchos los avisos en forma de enfermedades, hambrunas y guerras, pero la respuesta siempre ha sido la misma, infravalorar sus consecuencias. Son las plagas del capitalismo. La gripe aviar, las vacas locas, la gripe porcina, salmones contaminados, la pérdida de la diversidad, extinción de especies, la desertización, disminución de los bosques y selvas tropicales. Nada detiene el afán predador del capital.

La explotación de seres humanos, flora, fauna y riquezas minerales, se extiende. Una acción predadora que gracias a la revolución cibernética y robótica se acelera. América Latina está en el centro de estas transformaciones. Las granjas sobrepobladas de aves, ganado, las plantaciones de soja, palma, sorgo, maíz, girasol y trigo se benefician de una robotización de sus labores, al tiempo que son portadoras de nuevas plagas. Drones, algoritmos, un cúmulo de información racionaliza aún más la explotación. Las oligarquías y plutocracias han decidido convertir nuestros países en colonias de un capitalismo digitalizado e interconectado.

El territorio, sus riquezas, su población constituyen el objetivo; aunque siempre lo han sido, en la actualidad lo hace bajo nuevas pautas. Hoy se habla de agricultura digital bajo el nombre pomposo de utilizar el *Internet de las cosas*, el *big data* y la inteligencia artificial.

Los grandes ganadores de la pandemia han sido las plataformas digitales que además de hacer ganancias astronómicas han exacerbado desigualdades e injusticias, paradójicamente, bajo la imagen idílica de que “estamos todos conectados”. Ahora la agenda de estas empresas avanzó vertiginosamente, también en el mayor mercado del planeta: agricultura y alimentación

[...] Las más grandes empresas de ambos sectores están en movimiento, tanto en el Norte como en el Sur. *Microsoft* ha diseñado programas especiales para digitalizar todo el trabajo en el campo; varias empresas digitales tienen contratos con empresas de maquinarias, como *John Deere* y *CNH*, para la recolección, a través de tractores, de datos de suelo, siembra y clima en sus nubes electrónicas. Las mayores empresas globales de comercio de materias primas agrícolas, *Cargill*, *ADM*, *Cofco*, *Bunge*, *Louis Dreyfus* y *Glencore*, sostienen una colaboración para el desarrollo de plataformas de tecnologías digitales para automatizar el comercio mundial de granos (Ribeiro, 2020).

Las transnacionales de la agroindustria *Bayer*, *DuPont*, *Syngenta*, *BASF* son dueñas de macroprocesadores de información sobre los cuales construyen sus políticas de explotación agrícola, es decir:

Lo que hace que los datos sean “fértiles” es la conectividad. Sin conectividad, la agricultura de precisión no puede funcionar; es requisito previo para hacer uso de los algoritmos de Big Ag que determinan el soporte técnico y las recetas agrícolas a través de plataformas agrícolas digitales de pago. Privilegiar los datos por encima de la tierra —la información digital por encima de los sistemas de conocimiento de las comunidades y mujeres indígenas que cultivan y crían a través de generaciones— apunta a una tendencia alarmante: la desmaterialización de los recursos biológicos y genéticos que son la base del sistema alimentario, pero también la erosión de los derechos, el desempoderamiento y la invisibilización de los campesinos y las ricas culturas, prácticas y sistemas de conocimiento que sustentan las diversas agriculturas en todo el mundo (Grupo ETC, 2019, p. 32).

Un liberalismo militarizado se impone en todo el mundo. Romper las resistencias, disolver y criminalizar los movimientos sociales es su horizonte político. El capitalismo dependiente se recrea en su fase tecnológica-digital-industrial-financiera. El mundo, tal y como lo conocemos, se desvanece. El capitalismo ha entrado en una deriva que precipita a la especie humana a la extinción.

En su huida hacia adelante, el complejo militar, industrial y financiero que gobierna a las dos terceras partes del planeta, aumenta las desigualdades, el hambre y la sobreexplotación. Al mismo tiempo lo hace la represión, la violencia y la criminalización de las luchas democráticas. Vivimos una segunda oligarquización del poder, producto de un cambio estructural del capitalismo, afectando las relaciones sociales de dominación, explotación y apropiación del plusvalor.

Si la primera ola se articuló bajo la revolución industrial y científico-técnica, teniendo al imperialismo como su forma emergente, hoy se presenta bajo la globalización neoliberal y la revolución cibernética del *big data* y la IA. Es la transición del capitalismo analógico al capitalismo digital. Poder, violencia, dominación, disciplina, control, se reorientan acorde a las propias leyes de acumulación, explotación, producción y reproducción del capital. La contradicción capital-trabajo asume formas novedosas que acaban por redefinir al capitalismo. El dominio del cuerpo y la mente unen biopolítica y psicopolítica.

El calentamiento global, junto a la contaminación medioambiental, dan al traste con la visión idílica del neoliberalismo. Las consecuencias se proyectan en la vida cotidiana. A los largos periodos de sequías, migraciones del hambre y el desarrollo de la necropolítica, le siguen la depresión, las enfermedades autolíticas, el estrés, la obesidad mórbida, la diabetes, el síndrome de atención deficiente, la bulimia, la anorexia, junto a una creciente infelicidad colectiva, generada por la desigualdad, el trabajo basura, la flexibilidad laboral y la autoexplotación.

Las luchas sociales se generalizan; desde todos los frentes se producen rupturas; los muros se resquebrajan; el patriarcado

se cuestiona; el movimiento feminista se rehace; los pueblos originarios defienden sus territorios; la lucha contra los transgénicos y las trasnacionales de la agroindustria tienen su referente en Vía Campesina; los estudiantes, el movimiento obrero y la juventud completan el cuadro de resistencias; el capitalismo vive su peor momento; asimismo, leyes mordaza, antiterroristas, o defensa interior. La presencia de las fuerzas armadas en actividades variopintas, como la lucha contra el narcotráfico, se transforman en diques de contención contra quienes levantan la voz frente a los megaproyectos y las políticas extractivistas. Es el nacimiento de un estado de guerra permanente.

Asistimos a la militarización de la sociedad. Si la presencia de las fuerzas armadas es una realidad en las poblaciones de las grandes ciudades y zonas rurales conflictivas, resistencias de los pueblos originarios o campesinos ejidales, el capitalismo digital busca reducir el grado de violencia y el uso de la fuerza directa: una contradicción que es posible superar gracias a la informática de la dominación; una guerra en la cual se busca la sumisión consentida del enemigo, generando un sentimiento de libertad individual; el panóptico de un poder en el cual el gran hermano desaparece, una realidad que se expande y en la cual el neoliberalismo se constituye en la propuesta capaz de realizar la libertad y la democracia subsumidas en el proceso de explotación. Veamos:

El neoliberalismo es un sistema muy eficiente, incluso inteligente, para explotar la libertad. Se explota todo aquello que pertenece a prácticas y formas de libertad, como la emoción, el juego y la comunicación. No es eficiente explotar a alguien contra su voluntad. En la explotación ajena, el producto final es nimio. Solo la explotación de la libertad genera el mayor rendimiento [...] Por mediación de la libertad individual se realiza la libertad del capital. De este modo, el individuo libre es degradado a órgano sexual del capital. La libertad individual

confiere al capital una subjetividad automática que lo impulsa a la reproducción activa. Así, el capital “pare” continuamente “crías vivientes”. La libertad individual, que hoy adopta una forma excesiva, no es en último término otra cosa que exceso de capital (Han, 2014a, p. 13).

El individualismo extremo, preconizado bajo la libertad de mercado, el yo consumidor, emprendedor y empoderado, se potencia. Se trata de destruir cualquier proyecto colectivo, mermar las formas de lucha donde emerja una alterativa democrática, portadora de una propuesta anticapitalista. Afianzando el yo, se destruyen los vínculos de unión sobre los cuales se construye la ciudadanía política.

La creciente tendencia al egoísmo y la atomización de la sociedad hace que se encojan de forma radical los espacios para la acción común, e impide con ello la formación de un poder contrario, que pudiera cuestionar realmente el orden capitalista [...] Lo que caracteriza la actual constitución social no es la *multitud*, sino, más bien, la soledad. Esa constitución está inmersa en una decadencia general de lo común y lo comunitario. Desaparece la solidaridad. La privatización se impone hasta en el alma (Han, 2014b, pp. 31-32).

Se trata de una realidad que encuentra en la informática, la cibernética y la IA su justificación ideológica. Hoy, la capacidad de reflexión, el juicio crítico, representa un problema para el sistema. Criminalizar el pensamiento y cerrar espacios democráticos de negociación, diálogo, participación y mediación colectiva, se vuelve una necesidad vital para la sobrevivencia del capitalismo. Es el tiempo de un totalitarismo en cuyo marco se han difuminado los límites entre dominación, disciplina y obediencia. La frontera entre periodos de guerra y paz tiende a desaparecer. La concepción de hacer política se redefine como gestión de un poder absoluto, en cuyo seno ve la luz el nuevo

totalitarismo invertido. Vale decir:

A diferencia de los regímenes totalitarios clásicos que no desaprovechan la oportunidad de presentar situaciones dramáticas y de insistir en una transformación radical que erradicara virtualmente todo rastro del sistema anterior, el totalitarismo invertido ha surgido imperceptiblemente, de manera no premeditada, en una aparente continuidad ininterrumpida [...]. Para nuestros fines, una inversión se produce cuando puntos de partida aparentemente desvinculados, hasta disímiles, convergen y se fortalecen entre sí. Una corporación gigantesca incluye sesiones de oración para sus ejecutivos, mientras que los evangélicos se reúnen en congregaciones concesionadas y predicadores millonarios exaltan las virtudes del capitalismo. Cada uno de ellos es un componente confiable de un sistema cuya cara pública es el gobierno.

Hay una inversión cuando un sistema, como una democracia, produce un número de acciones significativas que suelen asociarse con sus antítesis: por ejemplo, cuando un jefe electo del ejecutivo tiene el poder de encarcelar a un acusado sin garantías procesales, cuando sanciona el uso de la tortura mientras que instruye a la nación acerca de la santidad del estado de derecho. El nuevo sistema, el totalitarismo invertido, profesa ser lo opuesto de lo que es en realidad. Niega su verdadera identidad, en la esperanza de que sus desviaciones sean normalizadas como “cambios”. Hace exactamente lo contrario de lo que hacen los totalitarismos clásicos, que lejos de disimular su ruptura con el sistema constitucional del pasado, la celebran (Wolin, 2008).

Dicho en otras palabras:

Es el devenir de un estado de excepción permanente. Se trata, como vemos, de lo mismo en la paz política y en la guerra: del dominio de la voluntad del enemigo. La guerra se continúa en la paz por otros medios: invadiendo la política del cuerpo y la cabeza de las personas. El objetivo es idéntico, no hay diferencia entre la paz y la guerra, y solo los medios difieren.

Pero estos medios psicológicos se utilizan —en la política interior del Estado— antes que recurrir a los medios físicos:

antes de hacer visible el fundamento guerrero de la política. Si hay guerra psicológica hay guerra continua: no hay campo de paz, sino solo apariencia de tal, mientras se los vence y domina de otro modo.

La lucha psicológica se transforma así en permanente, universal y total. Permanente porque la agresión psicológica no distingue entre tiempo de paz y tiempo de guerra. Universal porque los medios modernos de difusión no se detienen en las fronteras y porque el “enemigo” recluta sus aliados entre las mismas filas del adversario. Total, en fin, porque la lucha es llevada hasta el espíritu mismo de la persona (Baró, 1990, p. 114).

Desde la caída del muro de Berlín y el bloque del Este, hubo necesidad de redefinir el orden mundial. Estados Unidos impuso la política del unilateralismo; la Primera Guerra del Golfo fue la excusa esgrimida para realizar su proyecto; la paz de posguerra dejó fuera de foco a las Naciones Unidas y buena parte de los organismos multilaterales; las tecnociencias cobraron relevancia; la Red se consolidó; los algoritmos se generalizaron, y el *big data* entró en escena.

En la década de 1980, se produjo una especie de inversión con el advenimiento expansivo de lo digital, por acordarse la prioridad al “fundamento” emblemático en la figura de la computadora personal, de un nuevo tipo de exaltación que ya no se vinculaba con la supuesta intensificación de la calidad de vida, sino con *la cosa misma*. Era la admiración por un objeto precisamente “virtual”, que entraba al hogar y al que había que entender no en su dimensión habitual, sino en relación con sus capacidades en germen. Como se pudo presentir pronto, inauguraba, sin decirlo exactamente, una realidad destinada a ser transformada de modo radical a través del incremento indefinidamente abierto de su potencia. Este sentimiento se vio favorecido por el tamaño relativamente modesto del aparato, inversamente proporcional a la incalculable suma de promesas que develaría con el tiempo. En el interior de esta tensión entre presencia de un dispositivo con capacidades aún limitadas, pero continuamente ampliadas año tras año y la conciencia de una infinidad potencial, ha tomado forma, en principio entre

los iniciados y luego en la sociedad entera, una relación casi deslumbradora con la computadora y, más ampliamente, con las tecnologías digitales (Sadin, 2017, p. 90).

Las neurociencias lograban un protagonismo desconocido. El capitalismo se rearma y se plantea nuevos objetivos. Las emociones, un mundo hasta ese momento oscuro, fueron retomadas como objetivo militar. Se abría una nueva dimensión en la guerra psicológica: controlar y dirigir el miedo, la ira, la alegría, la aversión y sobre todo el dolor. Asimismo, se comenzó a popularizar el concepto de inteligencia emocional: se trataba de manejar estados de ánimo transitorios e incontrolables y revertirlos hacia comportamientos sumisos. La informática de la dominación lo hizo realidad. Desde ese mismo momento, las emociones, gracias al desarrollo de las tecnologías digitales, pasaron a ser un arma para el control social, como se explica a continuación:

Electromagnéticas, cinéticas o químicas, las nuevas armas no letales desafían el concepto de guerra como sinónimo de destrucción mutua tal y como la habían definido la disuasión y la proliferación nucleares.

Redefinir la guerra, colocando las nuevas bases de una nueva doctrina estratégica que considere las nuevas tecnologías de la información, es a lo que se han dedicado los estrategas del aire y del espacio después de la primera guerra del golfo Pérsico; guerra en la que fueron ensayados, en situación real, nuevos sistemas de armamento automático y autoprogramados de largo alcance. El postulado es que “la nueva guerra de la información” ofrece a los poderes militares la posibilidad de crecer en eficacia disminuyendo la violencia [...] significa que la guerra de la información tiene que ver con la forma en que los humanos piensan, y lo que es más importante, con la forma en que toman sus decisiones [...] Esta redefinición de la guerra bajo el prisma de la información es resumida por Richard Szafranski mediante una metáfora biológica: «la guerra

neocortical [...] Una guerra que se esfuerza en controlar o en modelar el comportamiento del organismo enemigo, pero sin destruir los organismos. Y esto se logra buscando influir incluso hasta el punto de regular la conciencia, las percepciones y la voluntad de liderazgo del adversario: el sistema neocortical del enemigo. El objetivo es el de paralizar en el adversario el ciclo de observación, de la decisión y de la acción. En suma, se trata de anular su capacidad de comprender» (Mattelart y Vitalis, 2015, pp. 99-100).

Gracias al desarrollo de algoritmos para determinar el estado emocional de cada individuo, las empresas privadas a las cuales pertenecen pueden reconducir las emociones. En definitiva, modificar comportamientos y direccionar la conducta. El miedo, el dolor, se convierten en un plus para el control político. En tanto los datos son entregados a los centros de seguridad nacional, los Estados amplían su control sobre los ciudadanos, a la par que minan las resistencias a la libertad del capital. Es el nacimiento de un *superpoder*, desde el cual se proyecta el neoliberalismo libertario, donde:

no se trata tanto de control y recolección abusiva de datos personales, sino de una conformación bastante distinta cuyo objetivo no es vigilar sino influir sobre los comportamientos de hacer como si, gracias a una arquitectura técnica, pudiera prevalecer indefinidamente una organización correcta de las cosas [...] Se supone que la vigilancia intercepta y aísla a los individuos que han cometido delitos o son susceptibles de cometerlos. La administración automatizada de las conductas pretende generalizar el principio de interiorización de los preceptos estimados como fundamentales a fin de que, al igual que con las cercas eléctricas que cierran ciertos espacios, se envíen descargas a los elementos del rebaño que se extravíen y salgan del perímetro previsto, por descuido o voluntariamente. La arquitectura de la matriz basta por sí misma para contener toda veleidad divergente (Sadin, 2020, p. 222).

Bajo la emergencia del tecnolibertarismo, el *superpoder* se recrea y aumenta. En tanto, une a las grandes empresas privadas del capitalismo digital. Las posibilidades abiertas por el reconocimiento de voz y los algoritmos biométricos producen un cambio en la digitalización del mundo. Pero no solo se aplica a seres humanos. Por ejemplo:

Big Ag está reclutando a expertos en tecnología de medios sociales para que ayuden a rastrear ganado [...] están utilizando tecnologías de reconocimiento de rostros para crear una base de datos de rostros de cerdos, con la esperanza de que la capacidad de identificar a un cerdo individual y monitorear su comportamiento —incluyendo el seguimiento de la tos a través del reconocimiento de voz— pueda ayudar a los administradores de granjas a abordar los problemas en sus primeras etapas. Cargill ha invertido en una empresa emergente, con sede en Dublín, especializada en el reconocimiento del rostro de las vacas lecheras para aumentar «la capacidad de sus clientes de tomar decisiones proactivas y predictivas para mejorar la eficiencia de sus granjas». Como explica el fundador de la compañía: «las vacas no se esconden detrás de sombreros, gafas de sol o ropa, y no se oponen a que las espíen» (Grupo ETC, 2019, p. 4).

La llamada transición digital se impone, revolucionando la forma sobre la cual se presentó en los años ochenta del siglo pasado. Cada vez es menos necesaria la mediación de una pantalla, sea del ordenador o de los dispositivos móviles contenidos en la telefonía móvil:

A largo plazo, las pantallas resultarán engorrosas para colmar esta aspiración de mediar entre la mente y el mundo. Las tecnologías de reconocimiento de voz, como *Alexa*, de *Amazon*, o *Siri*, de *Apple*, posibilitan la captura de los pensamientos y los deseos de un modo aural y metamorfosearlos en datos. *Amazon* ha patentado una tecnología que detecta quién está hablando en cualquier momento y progresivamente desarrolla un perfil de su personalidad y sus gustos.

Mostrando una curiosa mezcla de las metáforas sensoriales, esta tecnología se conoce en inglés como *voice-sniffing* o “inhalador de voz”. Las tecnologías que, como *Apple Watch* o *Fitbit*, llevamos puestas, capturan los datos emitidos por nuestros cuerpos mientras estos responden a diferentes entornos o productos. *Amazon Dash* es un pequeño dispositivo que se cuelga de la pared y provisto de un botón, para que el usuario lo presione cada vez que un producto del hogar se le agote, una información que se transmite a *Amazon* en forma de pedido. Lo que hacen todas estas tecnologías es minimizar la posibilidad de que el individuo exprese sus pensamientos mediante otro medio que no sea el poseído por la plataforma en cuestión. Huelga decir que el medio más inmediato sería cualquiera que pudiera llegar directamente a los “pensamientos” en el instante mismo en que estos se forman en el cerebro (Davies, 2019, p. 276).

Pasar de la explotación a la autoexplotación como principio del tecnolibertarismo neoliberal, se convierte en el gran objetivo del capitalismo digital. Ser explotado y sentirse libre supone forjar un poder que:

no opera de frente contra la voluntad de los sujetos sometidos, sino que dirige esa voluntad a su favor. Es más afirmativo que negador, más seductor que represor. Se esfuerza en generar emociones positivas y en explotarlas. Seduce, en el lugar de prohibir. No se enfrenta al sujeto, le da facilidades. El poder inteligente se ajusta a la psique en lugar de disciplinarla y someterla a coacciones y prohibiciones. No nos impone ningún silencio: nos exige compartir, participar, comunicar nuestras opiniones, necesidades, deseos y preferencias; esto es contar nuestra vida. Este poder amable es más poderoso que el poder represivo. Escapa a toda visibilidad.

La presente crisis de libertad consiste en que estamos ante una técnica de poder que no niega o somete la libertad, sino que la explota. Se elimina la decisión libre en favor de la libre elección entre distintas ofertas.

El poder inteligente, de apariencia amable, que estimula y seduce, es más efectivo que el poder que clasifica, amenaza y prescribe. El botón de *me gusta* es su signo. Uno se somete al entramado del poder consumiendo y comunicándose,

incluso haciendo clic en el botón de *me gusta*. El neoliberalismo es el *capitalismo del me gusta* [...] El poder inteligente lee y evalúa nuestros pensamientos conscientes e inconscientes. Apuesta por la organización y optimización propias realizadas de forma voluntaria. Así no ha de superar ninguna resistencia. Esta dominación no requiere de gran esfuerzo, de violencia, ya que simplemente sucede (Han, 2014, pp. 29-30).

Hoy, este tipo de dominación está cada vez más cerca, en tanto la Red se presenta como creadora de democracia y libertad. Nuevos autoritarismos nacen al albur de la Red controlada por las grandes empresas que desarrollan las aplicaciones (*App*) para introducir el concepto de la democracia digital 2.0, cuyo objetivo consiste en transformar al ciudadano en un consumidor de servicios vía internet.

Los usuarios de los servicios 2.0, por lo general no son conscientes de la enorme complejidad que subyace a su experiencia de la Red, que se halla casi por completo en manos de empresas privadas con fines de lucro. De ahí, sostener que las experiencias de los usuarios, altamente subjetivas y heterogéneas entre sí, son esencialmente libres y democráticas, constituye otra falacia ontológica que supone que las herramientas proporcionadas gratuitamente a los usuarios por los intermediarios digitales son “naturalmente” libres y democráticas [...] *Google* no está haciendo más democrático el mundo; *Facebook* no nos está transformando en mejores personas; *Apple* no nos está convirtiendo en gente más creativa; *Amazon* no está expandiendo posibilidad de elección; *Twitter* no nos hace corresponsal de las revoluciones en curso. Solo existe un puñado de protagonistas, los nuevos amos digitales, los grandes mediadores informacionales, que recombinan el espacio en subredes comunitarias cada vez más homogéneas (Ippolita, 2016, p. 80).

América Latina forma parte del entramado en el cual las nuevas empresas, sobre las cuales se asienta el poder de la dominación digital, han aumentado su presencia en la región. *Google*, *Amazon*, *Apple*, *Facebook* y *Microsoft* ven cómo sus dispositivos

móviles y sus aplicaciones son hegemónicas. Sin embargo, la brecha digital se profundiza. El acceso a Internet no está garantizado y la pobreza derivada de las nuevas tecnologías se hace sentir con mayor fuerza en las clases populares.

Ello no ha sido un problema para que la fundación de *Microsoft*, dirigida por Melinda y Bill Gates, emprenda una actividad ingente en todos aquellos sectores productivos en los cuales el uso de sus dispositivos pueda realizar el sueño de la dominación digital; educación, sanidad, agricultura e industria son el objetivo. El ya mencionado *Internet de las cosas*, el *big data* y la IA se proyectan en las reformas laborales, la producción agroalimentaria, las universidades, los hospitales, centros de salud. La robótica se expande en todas las ramas productivas. Nada escapa al capitalismo digital y la informática de la dominación.

El *Internet de las cosas* facilita la interconexión bajo un solo mando y hace viable almacenar, analizar, utilizar y organizar un cúmulo de datos para un mismo objetivo. La posibilidad de manejar en tiempo real la información proveniente de dispositivos dispersos abre la puerta a un control digital de cuanta actividad humana se desarrolle al interior de la Red. La relación que se produce entre dispositivos desplaza al ser humano de su capacidad de tomar decisiones y lo sitúa como portador de información para que los algoritmos construyan su realidad cotidiana: la dominación perfecta.

En esta lógica, se avanza hacia una deshumanización bajo el pretexto de hacer la vida más fácil. El libertarismo neoliberal consiste en:

instituir una organización automatizada del mundo por medio de sistemas algorítmicos que regulan el curso de las cosas y abren horizontes virtualmente infinitos de beneficios. Ahí se ubica la singularidad del tecnoliberalismo, que disuelve todos los fundamentos históricos de la economía y de lo político. La ontología tecnoliberalista consiste en descalificar la acción humana en beneficio de un “ser computacional” que se juzga superior. Su *ethos* económico quiebra todo principio de integridad y pretende adosarse a la vida, hacer cuerpo con ella y capitalizarse a partir de una a-política o una tecnopolítica que procura liberarse de lo político entendido como la libre capacidad de los individuos y de los pueblos para decidir, en común y dentro de la contradicción, su destino singular. Incluso si la *Weltanschauung* siliconiana no deja de ganar espíritus y territorios, algunos, mareados por su grandeza, sienten impaciencia y quisieran crear «zonas a defender tecnolibertarias, liberadas de toda obligación de todo principio democrático [...]» (Sadin, 2018, p. 126).

La dependencia digital es la puerta de entrada a un nuevo autoritarismo, menos visible. Bajo la apariencia de la libertad y la democracia 2.0 asistimos a un control de las emociones y los sentimientos. De forma imperceptible, los algoritmos, acorde al *big data*, irán orientando la conducta hacia las decisiones acertadas. La sensación de sentirse libre es la dominación perfecta. Los dispositivos transmiten un ingente cúmulo de datos que son procesados por las grandes compañías de la red digital.

Los gobiernos no escapan a la realidad digital. Así, son articuladores de este nuevo autoritarismo que lentamente se extiende por el planeta. Autoritarismo que subsume y convive con viejas formas donde se reconocen dictadores, caudillos, tiranos y autócratas. Sin embargo, las maneras tradicionales que identifican el autoritarismo: la violencia y represión exterior, ceden su lugar al ideario tecnodigital que es aceptado como:

portador de potencialidades infinitas que encarnan además una forma luminosa de capitalismo. Y se supone que no se basa más en la explotación de la mayoría de sus actores, sino en 'virtudes igualitarias', porque ofrece a todos, desde el '*startupper visionario*', hasta el 'colaborador creativo' o el 'emprendedor autónomo', la posibilidad de vincularse 'libremente' y entonces expandirse (Sadin, 2018, p. 31).

La transición del capitalismo analógico al capitalismo digital asienta un poder positivo, una versión donde no es necesaria la vigilancia a través de técnicas invasivas. La resistencia se anula mediante una potenciación del yo hasta el extremo de entender y negar la violencia de la explotación, para situarla como libertad para autoexplotarse.

Los nuevos medios de comunicación diluyen el ser para el otro. El mundo virtual es pobre en *alteridad* y *resistencia*. En los espacios virtuales, el yo prácticamente se puede ver sin el '*principio de realidad*' que sería *principio del otro y de resistencia*. En los espacios imaginarios de la virtualidad, el yo narcisista se encuentra fundamentalmente consigo mismo. La virtualización y la digitalización comporten cada vez más la desaparición de lo real que se hace perceptible, sobre todo en la resistencia que presenta [...] El sujeto de obediencia está sometido a una instancia de dominación que lo explota [...] el sujeto de rendimiento es libre, puesto que no está sometido a nadie. Su constitución física está definida por el poder, no por el deber.

Su existencia está regida por la libertad y la iniciativa, no por mandatos ni prohibiciones. En lugar de la explotación ajena aparece la autoexplotación. El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo hasta desmoronarse. En este sentido, la violencia y la libertad son lo mismo. La violencia se dirige hacia uno mismo.

El explotador es el explotado [...] De todo esto se sigue que la violencia de la positividad es más traidora que la violencia de la negatividad, puesto que se ofrece como libertad, [...] se libra una guerra con uno mismo, uno se violenta a sí mismo [...] Paradójicamente, la nueva prisión se llama libertad. Se parece a un campo de trabajo forzado, donde uno está prisionero y a la vez es el vigilante (Han, 2016, p. 135).

Los estudios pioneros de Eric Fromm centrados en descubrir los factores del ascenso del nazismo, mediante el estudio pormenorizado del carácter que hace posible la dominación autoritaria, fue expuesto en su obra *El miedo a la libertad*. Allí encontramos los argumentos para comprender la distancia que separa el carácter del autoritarismo del capitalismo industrial-analógico, de su forma digital en el liberalismo libertario. En el primero, que además coincide con la expansión del imperialismo de entreguerras, se observa cómo el individuo es presa de la contradicción nacida de la modernidad capitalista. En el proceso de secularización e individualización, se siente solo, aislado, desprotegido. Practicar la libertad le resulta una carga. Prefiere inhibirse, a cambio de obtener una seguridad que le permita disminuir la incertidumbre. Impotente y extraviado, no sabe qué hacer con su libertad, tiene miedo. De esta forma, se despoja de la libertad, abrazando un poder que le arrope y brinde seguridad. Fromm (1977) compara el autoritarismo nazi-fascista como:

la anulación del yo individual y el intento de sobreponerse, por este medio, a la intolerable sensación de impotencia [...] El otro aspecto lo hallamos en el intento de convertirse en parte integrante de alguna más grande y más poderosa entidad superior a la persona, sumergiéndose en ella [...] Al trasformarse en parte de un poder sentido como incommovible, fuerte, eterno y fascinador, el individuo participa de su fuerza y de su gloria. Entrega su propio yo y renuncia a toda fuerza y orgullo de su personalidad; pierde su integridad como individuo y se despoja de la libertad; pero gana en seguridad que no tenía y el orgullo de participar en el poder en el que se ha sumergido.

También se asegura contra las torturas de la duda. La persona masoquista, tanto cuando se somete a una autoridad exterior como en el caso en que su amo sea una autoridad que se ha incorporado el yo, la conciencia o alguna compulsión psíquica, se salva de la necesidad de tomar decisiones, de asumir la responsabilidad final por el destino del yo y, por lo tanto, de la duda que acompaña la decisión. También se ve aliviado de la duda acerca del sentido de su vida o de quién es él. Tales

preguntas hallan contestación en la conexión con el poder con el cual el individuo se ha relacionado (p. 180).

Esta concepción de Fromm tendrá, en la obra de Theodor Adorno y colaboradores, su continuación. Bajo *La personalidad autoritaria*, el autoritarismo será analizado como una tendencia a asumir situaciones de dominación y sumisión, sadomasoquismo, dado la inseguridad y ansiedad que provoca el ejercicio de la libertad. Se trataba de una propuesta en la cual se pudiese alertar, intuir, la emergencia de regímenes donde el fascismo pudiera desarrollarse y crecer. En definitiva, descubrir «los sujetos potencialmente fascistas, cuya personalidad es tal, que le hace receptivo a la propaganda antidemocrática». Los resultados de la investigación constituyen el punto de inflexión para conceptualizar el grado de vulnerabilidad y la aceptación de sujetos propensos a identificarse con un discurso e ideología antidemocrática.

Así, en su investigación identifican nueve características que darían pie a configurar una estructura psíquica de la personalidad autoritaria y antidemocrática: 1) *convencionalismo*: adhesión rígida a los valores de la mediana burguesía; 2) *sumisión autoritaria*: aceptación incondicional a las autoridades morales idealizadas del endogrupo; 3) *agresividad autoritaria*: tendencia a buscar, condenar, rechazar y castigar a los sujetos que violan los valores convencionales; 4) *antiintraseptividad*: oposición a lo subjetivo, la reflexión, introspección y ejercicio del juicio crítico; 5) *superstición y visión tópica*: creencia en la determinación sobrenatural del destino humano e inclinación a pensar en categorías rígidas; 6) *poder y fortaleza*: preocupación por la dimensión dominio-sumisión, fuerte-débil, en sus relaciones interpersonales, identificándose con las figuras que representan el poder y valorando en exceso la fuerza y la

capacidad de mando; 7) *destrutividad y cinismo*: pensamiento hostil y desprecio global hacia el pensamiento humanista; 8) *proyectividad*: dirigir hacia el exterior impulsos emocionales inconscientes en la creencia que en el mundo ocurren sucesos desenfrenados y peligrosos, 9) *deseo de dominio sexual y personalidad sadomasoquista* (Adorno, 2009, p. 438).

Por consiguiente, la personalidad autoritaria forma parte de una razón cultural totalitaria, donde el nazi-fascismo se constituye como referente. El Holocausto sería su máxima expresión; en tanto racionalizó la muerte, la tortura, el crimen, deshumanizó e invisibilizó a las víctimas. Así lo expresa Bauman (2011):

Teniendo presente este efecto de invisibilidad de las víctimas, resulta más fácil entender las sucesivas mejoras en la tecnología del Holocausto. En la fase de *Einsatzgruppen*, se llevaba a las víctimas acorraladas frente a las ametralladoras y se las mataba a quemarropa. Aunque se hicieron intentos para mantener las armas a la mayor distancia posible de las fosas a las que iban a caer las y los asesinados, era sumamente difícil para los que disparaban pasar por alto la relación entre disparar y matar. Por esa razón, los administradores del genocidio decidieron que el método era primitivo y poco eficaz, a la vez que peligroso para la moral de los autores.

En consecuencia, buscaron otras técnicas de asesinato, técnicas que separarían ópticamente a los asesinos de las víctimas. La búsqueda tuvo éxito y llevó a la invención de la cámara de gas, las primeras móviles.

En un segundo momento, las cámaras se hicieron fijas —las más perfectas que le dio tiempo inventar a los nazis— reduciendo el papel del asesino al de “oficial de sanidad” que tenía que vaciar un saco de “productos químicos desinfectantes” por la apertura de un tejado de un edificio cuyo interior no se le conminaba a visitar. El éxito técnico y administrativo del Holocausto se debió en parte a la experta utilización de las “pastillas para dormir la moralidad” [...] Los más importantes de todos estos somníferos eran los que producían la invisibilidad natural que adquieren las conexiones causales dentro del

sistema complejo de interacciones y el “distanciamiento” de los resultados repugnantes o moralmente repelentes de la acción, hasta el punto de hacerlos invisibles para el actor. Sin embargo, los nazis destacaron especialmente en un tercer método, que tampoco habían inventado ellos pero que perfeccionaron como nunca se había hecho. Este método consistía en hacer invisible la humanidad de las víctimas (pp. 48-49).

Los hornos crematorios del Tercer *Reich* funcionaron a plena luz del día. Cuando se encendían, el olor a carne humana alcanzaba a los pueblos cercanos, impregnaba todo el espacio. Pero la renuncia a la libertad de forma consentida hizo que los alemanes corrientes, prefirieran taparse la nariz y cerrar los ojos. Se encontraban cómodos, compartían el proyecto vital de dominación. Mientras Hitler fue seña de identidad del pueblo alemán, sus ciudadanos fueron disciplinados, obedientes y sumisos. No se llamaron a engaño.

El genocidio fue consentido. La mayoría se apuntó al partido, a sus juventudes y organizaciones de masas, siendo activos difusores de su ideología.

La revolución nazi [...] tuvo dos ideas claves fundamentales que estaban relacionadas: una empresa destructiva, que fue la revuelta total contra la civilización, y una empresa constructiva, que consistió en un intento singular de formar un hombre nuevo, un nuevo cuerpo social y un nuevo orden nazificado en Europa y más allá. Era una revolución insólita, porque en la esfera doméstica tuvo lugar, aun a pesar de la represión política de la izquierda en los primeros años, sin coacción y violencia generalizadas. La revolución fue ante todo la transformación de las conciencias, la inculcación en los alemanes de un nuevo carácter distintivo. En general, fue una revolución pacífica a la que accedió de buen grado el pueblo alemán. En la esfera doméstica, la revolución nazi alemana fue, en su conjunto, consensuada (Goldhagen, 1988, p. 242).

No hubo engaño, el pueblo alemán decidió libremente abandonarse a un poder totalitario donde se sentía cómodo y protegido. La personalidad autoritaria era ya una realidad como fuente legitimadora de un orden que renegaba de la democracia y la dignidad y se deshacía de su conciencia.

Si iniciábamos este ensayo señalando cómo la transformación del capitalismo analógico al capitalismo digital, afecta directamente la manera de adquirir conocimientos y, sobre todo, las formas en las cuales la mente-cerebro construye el mundo en el cual habitamos como *homo sapiens*, *sapiens*, es posible aventurar que asistimos a una transformación de la condición humana. Si Eric Fromm (1977), en *Anatomía de la destructividad humana*, consideró al hombre como el primate que apareció “en el punto de la evolución en que la determinación instintiva había llegado al mínimo, y el desarrollo del cerebro, al máximo”; el control de la mente-cerebro se convierte, para el capitalismo digital, en la mejor estrategia para imponer un totalitarismo bajo el dominio de la inteligencia artificial.

REFERENCIAS



- Adorno, T. W.** (2009). Estudios sobre la personalidad autoritaria. En Adorno, T. W., *Escritos sociológicos II*, vol. I. Akal.
- Arrighi, G.** (1996). *O longo século XX*. Unesp.
- Baró, I. (Coord.).** (1990). *Psicología social de la guerra*. UCA.
- Bauman, Z.** (2011). *Modernidad y Holocausto*. Sequitur.
- Carr, N.** (2018). *Superficiales. ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?* Debolsillo.
- Coutinho, C. N.** (1994). *Marxismo e política*. Cortez.
- Davies, W.** (2019). *Estados nerviosos. Cómo las emociones se han adueñado de la sociedad*. Sexto Piso.
- Durkheim, É.** (1983). *Da divisão do trabalho social; As regras do método sociológico e outros*. Nova Cultural.
- Fiori, J. L.** (1994). Os moedeiros falsos. *Folha de São Paulo*.
<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/7/03/mais/11.html>
- Fromm, E.** (1977). *El miedo a la libertad*. Paidós.
- Giglio Prado, F. y Torres, P.** (2021). *Integrado: Aportes para la discusión de un nuevo Sistema Nacional de Salud en Argentina*. MT Editores.
- Goldhagen, D. J.** (1988). *Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el holocausto*. Taurus.
- Grupo ETC.** (2019). *Tecnofusiones comestibles. Mapa del poder corporativo en la cadena alimentaria*. ETC Group. <https://tinyurl.com/y8bwd6k3>
- Habermas, J.** (1982). *Conhecimento e interesse*. Zahar.
- Han, B. C.** (2014a). *Psicopolítica. Neoliberalismo y nuevas técnicas del poder*. Herder.
(2014b). *En el enjambre*. Herder.
(2016). *Topología de la violencia*. Herder.
- Hartmut, R.** (2016). *Alienación y aceleración. Hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía*. Katz.
- Harvey, D.** (1993). *Condição Pós-Moderna*. Edições Loyola.

- Hayek, A. V.** (1990). *O Caminho da Servidão*. Instituto Liberal.
- Ianni, O.** (1989). *A formação do Estado Populista na América latina*. Ática.
- Ippolita.** (2016). *Ídolos. ¿La red es libre y democrática? ¡Falso!* Enclave Libros.
- Lopreite, D.** (2022). The long road to abortion rights in Argentina (1983–2020). *Bulletin of Latin American Research*, 1-15. DOI:10.1111/blar.13350
- Lukács, G.** (1966). *La peculiaridad de lo estético 1: cuestiones preliminares y de principio*. Grijalbo.
(1981). *Marx y el problema de la decadencia ideológica*. Siglo XXI.
(2010). *Marxismo e teoria da literatura*. Expressão Popular.
- Marx, K., y Engels, F.** (2013). *A Ideologia Alemã*. Boitempo.
- Marx, K.** (1969). *Capítulo VI inédito de O capital: Resultados do processo de produção imediata*. Moraes.
(1975). Tesis sobre Feuerbach. En K. Marx y F. Engels. *Obras escogidas, Tomo II*. Editorial Fundamentos.
(1985). *El capital. Crítica de la economía política, Libro primero, Tomo I*. Siglo XXI.
(2004). *Manuscritos econômico-filosóficos*. Boitempo.
(2005). *Crítica da filosofia do direito de Hegel*. Boitempo.
(2010). *Sobre a questão judaica*. Boitempo.
- Mattelart, A. y Vitalis, A.** (2015). *De Orwell al cibercontrol*. Gedisa.
- Maturana, H. y Varela, F.** (1990). *El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del conocimiento humano*. Debate.
- Ribeiro, S.** (2020, 20 de junio). ¿Comida digital? No, gracias. *La Jornada*.
<https://www.jornada.com.mx/2020/06/20/>
- Rosso, G.** (2006). Hacia la reconstrucción del sector salud en la Argentina. Una mirada desde el gobierno. En M. N. Rico y F. Marco (Coords.), *Mujer y empleo: la reforma de la salud y la salud de la reforma en la Argentina* (1era ed., pp. 283-338). Siglo XXI Editores Argentina.
- Rovere, M.** (2021). Derecho a la salud y sistemas integrados. Lecciones de la pandemia. *Revista Debate Público: Reflexión de Trabajo Social*, 11(21), 22–25.



*Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons CC BY NC ND 4.0. Se autoriza su reproducción y distribución sin fines de lucro, citando la fuente.
Licencia completa: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>*



*Advertencia sobre uso de Inteligencia Artificial (IA):
Una parte de los contenidos aquí presentados puede haber sido asistida por herramientas de inteligencia artificial (IA), exclusivamente como apoyo en procesos de redacción, corrección o diseño. La revisión, validación y aprobación final de los materiales fue realizada por personas expertas. Asimismo, son los autores de cada texto quienes asumen la autoría y responsabilidad sobre la veracidad, integridad y originalidad de la obra.*



*Estado de Bienestar, Salud y Seguridad Social se terminó de imprimir y encuadernar en julio de 2025 en los talleres de impresión de Editorial ISSSTE, ubicados en Av. San Fernando 547-Edificio C, Tlalpan Centro I, Colonia Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14050, Ciudad de México, CDMX.
El tiraje fue de 1000 ejemplares.*

DISTRIBUCIÓN GRATUITA





Este libro propone una reflexión crítica sobre la configuración, las tensiones y los desafíos contemporáneos del «estado de bienestar», con especial énfasis en el sistema de salud y el papel que ha desempeñado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Desde una mirada que articula el pensamiento teórico con la práctica política, los textos que conforman esta obra analizan los efectos del modelo neoliberal sobre los derechos sociales, el deterioro institucional y la mercantilización progresiva de la salud y la seguridad social.

A lo largo de sus páginas, se plantea la necesidad de superar la fragmentación del sistema de salud, el desfinanciamiento estructural y la exclusión de los actores sociales en la toma de decisiones, elementos que han debilitado el acceso universal a servicios de calidad. Al mismo tiempo, se recuperan propuestas orientadas a fortalecer un modelo de salud con enfoque preventivo, comunitario, feminista y basado en el derecho a la atención digna.

Esta obra constituye una apuesta, en el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, por la reconstrucción de un sistema de protección social más equitativo, democrático e inclusivo, donde el conocimiento científico, la participación social y la voluntad política confluyan en la defensa del bienestar social.

ISBN: 978-607-7739-09-8



Gobierno de
México



ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO



EDITORIAL
ISSSTE